

MÁS ALLÁ DE PERSEO

ECONOMÍA DE LA
COCA Y DISPUTA
ARMADA EN EL
CAÑÓN DEL MICAY

Julio | 2026

MÁS ALLÁ DE PERSEO

ECONOMÍA DE LA
COCA Y DISPUTA
ARMADA EN EL
CAÑÓN DEL MICAY

Bogotá, JULIO 2026

Directora Ejecutiva de la FIP:

María Victoria Llorente

Director área de Conflicto y Seguridad:

Javier Flórez

Autores:

Ana María Rueda

Andrés Cajiao

Irina Cuesta

Julián Ríos Monroy

Edición y corrección de estilo:

Elizabeth Reyes

Diseño y diagramación

Christian Benito

Fotografía

Julián Ríos Monroy

ISBN

978-628-7558-88-5



FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

Contenido

4

INTRODUCCIÓN

8

LA PROMESA DE LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL

11

EL CAÑÓN DEL MICAY: ENTRE LA COCA, LA DISPUTA ARMADA Y LAS LIMITACIONES HISTÓRICAS DEL ESTADO

25

CONCLUSIONES

27

RECOMENDACIONES

27

CAMBIAR EL ENFOQUE DE LA INTERVENCIÓN

27

TRANSITAR DE UNA ESTRATEGIA DE CONTROL TERRITORIAL A LA GOBERNANZA TERRITORIAL

29

NO ES CONTENER, ES DESARTICULAR EL SISTEMA AGROINDUSTRIAL DE LA COCA

41

REFERENCIAS



INTRODUCCIÓN

Introducción

El 28 de agosto de 2023, tres semanas después de cumplir su primer año como jefe de Estado, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio de la Operación Trueno, una ofensiva militar para “*liberar de la economía ilícita*” al cañón del Micay. Según el mandatario, esta región del sur del Cauca concentraba más del 70 % de los cultivos de coca del departamento, y el corregimiento de El Plateado, ubicado en el municipio de Argelia, en el epicentro de la zona, funcionaba como el “*Wall Street*” de la cocaína en Colombia.

Más allá de una operación militar, el presidente presentó esta acción en el Micay como un esfuerzo de transformación territorial que buscaba debilitar el control de los grupos armados ilegales, reducir la dependencia de las economías ilícitas y ampliar la legitimidad estatal. El desafío no era menor: se trata de una región históricamente marcada por la ausencia institucional, la alta concentración de cultivos de coca y la regulación armada de la vida cotidiana. De esta apuesta surgieron las operaciones Perseo I y Perseo II, junto con programas de sustitución y transición económica como RenHacemos¹.

Sin embargo, la implementación de esta estrategia, una de las más emblemáticas del Gobierno Petro en materia territorial, enfrentó obstáculos desde el inicio. La presión militar sobre las disidencias del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC) logró reducir la intensidad de la confrontación armada y permitió ampliar la presencia de la Fuerza Pública en zonas históricamente vedadas. Aun así, ni la economía cocalera cedió, ni las disputas armadas cesaron, ni el Estado logró consolidar una presencia sostenida, lo que dejó en evidencia la distancia entre el propósito de recuperar y transformar el territorio y las capacidades reales para lograrlo.

El presente informe analiza los alcances, limitaciones y efectos recientes de la intervención estatal en el cañón del Micay, con énfasis en el corregimiento de El Plateado. Su propósito es responder dos preguntas: ¿qué logró transformar la estrategia —y qué no—? Y, a la luz de esta experiencia, ¿qué implica construir un modelo de transformación territorial en enclaves productivos de coca donde el Estado ha tenido una presencia históricamente débil y donde varios grupos ilegales se disputan el control territorial y ejercen formas de gobernanza criminal?

Para abordar estos interrogantes, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FES-

¹ Antes de la implementación del programa RenHacemos en 2025 y después de la Operación Trueno en 2023 se diseñó de forma participativa un piloto para desarrollar ganadería y cultivos de café, cacao y frutales, con una inversión de 29.000 millones de pesos y la vinculación de 146 familias de las veredas Sinaí, La Belleza, San Juan y El Mango. No fue posible inscribir a población de El Plateado por la situación de seguridad. En el marco de este proyecto se creó la asociación ASOCAFÉ y se inscribieron cuatro organizaciones sociales más, que hoy hacen parte de una cooperativa de productores gestionada por el Gobierno nacional en el marco de RenHacemos.

COL) y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) realizaron un estudio en el municipio de Argelia entre el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026. La investigación adoptó una metodología cualitativa que combinó revisión documental, análisis de información secundaria y trabajo de campo. Como parte de este proceso se realizaron entrevistas con líderes sociales, organizaciones comunitarias, asociaciones productivas, funcionarios públicos, organismos internacionales y otros actores con conocimiento directo de las dinámicas territoriales del cañón del Micay.

Entre las dimensiones exploradas están las dinámicas de seguridad y la reconfiguración de actores armados; las características y transformaciones de la economía de la coca; los alcances de la acción estatal y las capacidades institucionales tanto en materia de seguridad como de cultivos ilícitos; la gobernanza territorial y las disputas de autoridad; las percepciones y respuestas comunitarias; y, finalmente, los efectos no intencionados y las dinámicas que surgieron de la Operación Perseo.

El balance de la intervención es mixto. Por un lado, la estrategia logró disminuir parcialmente la disputa territorial entre el frente Carlos Patiño y el frente Diomer Cortés de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), y extender temporalmente la presencia militar. Por otro, poco se avanzó en reducir las economías ilegales o en sustituir las formas de regulación armada que caracterizan la zona. Pese a que el Gobierno presentó la intervención como una estrategia integral de transformación territorial, su ejecución ha resultado parcial, reactiva y desarticulada, lo que refleja las limitaciones de capacidad estatal, coordinación institucional y sostenibilidad que dificultan consolidar transformaciones estructurales duraderas en el cañón del Micay.

A partir de este diagnóstico, el informe busca aportar elementos de análisis y recomendaciones que contribuyan a orientar la continuidad y el fortalecimiento de las estrategias de intervención del Estado en la región.

El documento se organiza en cinco secciones: la primera introduce el estudio y su relevancia; la segunda describe la estrategia del Gobierno Petro en El Plateado; la tercera caracteriza el territorio y analiza los efectos de la acción gubernamental en los ámbitos de la economía de la coca, el control territorial de grupos armados y las limitaciones históricas del Estado. Las dos últimas secciones presentan las conclusiones y las recomendaciones de política pública.

Los hallazgos de este estudio son de carácter exploratorio; buscan ampliar el conocimiento sobre esta región del país y aportar insumos para la toma de decisiones de política pública.



01

LA PROMESA DE LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL

1. La promesa de transformación territorial

El cañón del Micay ocupó un lugar central en la estrategia territorial del Gobierno Petro. Si bien la situación de seguridad fue determinante, la región también adquirió un peso político y simbólico por ser uno de los principales enclaves productivos de coca del país y una de las zonas donde el Estado ha enfrentado mayores dificultades para consolidar una presencia efectiva.

Desde el inicio del mandato, el presidente Petro impulsó diversos mecanismos de intervención orientados a fortalecer esa presencia, proteger a las comunidades y avanzar en procesos de transformación territorial. El primero de ellos, en agosto de 2022, fue la instalación de un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) en el municipio de Caldono, un mecanismo interinstitucional de emergencia diseñado para proteger a la población, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos (W Radio, 2022). Esta estrategia logró reducir las confrontaciones entre los grupos armados y el Estado, no consiguió disminuir los altos índices de afectaciones humanitarias (FIP, 2022).

Un año después, la prioridad otorgada a esta región se consolidó con el anuncio de la Operación Trueno, una ofensiva que el presidente Petro presentó como un esfuerzo por “recuperar militarmente la región del Cañón del Micay [...] afectada por las economías ilícitas y las acciones criminales del EMC-FARC” (Presidencia de la República, 2023), al tiempo que buscaba presionar el cese al fuego y el inicio de una negociación con esas disidencias en el marco de la política de Paz Total.

La mesa de diálogo se instaló el 16 de octubre de 2023 e inició con un decreto de cese al fuego bilateral por tres meses. Sin embargo, las estructuras del Bloque Occidental del EMC continuaron con acciones violentas en el Cauca (Oquendo, 2025) y, tras varios meses de tensiones internas², el grupo se fracturó en dos facciones: una liderada por ‘Iván Mordisco’, que junto a las estructuras del Cauca abandonó la negociación, y otra bajo el mando de ‘Calarcá Córdoba’, que permaneció en

la mesa bajo la denominación de Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), según Ríos (2024).

A partir de ese momento, el Micay —y en particular el corregimiento de El Plateado— fue catalogado por los medios de comunicación como un “punto de honor”, un “botín de guerra” o un “trofeo”, tanto para el Estado como para los grupos armados. Para el frente Carlos Patiño, representaba un centro estratégico económico y militar; permanecer allí demostraba su capacidad de mantenerse en el territorio. Para el Gobierno, significaba probar que podía afectar a las disidencias y sus economías en un momento en que su política de paz atravesaba una crisis (FIP, 2023).

Fue en este contexto que el presidente Petro apostó por una intervención más robusta, que se materializó en la Operación Perseo, lanzada en octubre de 2024 con el objetivo de recuperar el casco urbano de El Plateado. Tras el ingreso de cerca de 1.400 uniformados al corregimiento y la instalación de una base militar, el Ejecutivo presentó la estrategia como la principal vitrina de la “Misión Cauca”. Para reforzar ese mensaje, al territorio llegaron varios ministros y altos funcionarios, quienes anunciaron más de 41 proyectos de mejoramiento de vías, infraestructura educativa y de salud, conectividad y programas para transformar la economía cocalera en actividades legales (Presidencia de la República, 2024).

En agosto de 2025, el Ejército anunció la Operación Perseo II (Calderón, 2025), concebida como una nueva fase para extender y consolidar el control hacia otros puntos estratégicos del cañón del Micay, especialmente en zonas rurales de El Tambo como Huisitó y San Juan

² Un hecho determinante en la ruptura interna del EMC fue la suspensión del cese al fuego bilateral en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Esta decisión del Gobierno se produjo como respuesta a un hecho de violencia cometido por el Bloque Occidental en el norte del Cauca: el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule, el 16 de marzo de 2024.

de Mechengue. Según la versión oficial, el operativo desplegó al menos 300 soldados con entrenamiento especializado, apoyados por la Policía, unidades de inteligencia, vehículos blindados y drones. El objetivo era debilitar las retaguardias logísticas del EMC, asegurar corredores y facilitar el avance de obras de infraestructura y programas estatales en las veredas.

A casi dos años del inicio de la Operación Perseo y tres de la Operación Trueno, el cañón del Micay representa una prueba crítica para evaluar la capacidad del Estado. En plena transición entre gobiernos, la pregunta central es si el despliegue militar y la movilización de recursos lograrán traducirse en formas duraderas de gobernanza, seguridad y desarrollo.

El 13 de octubre de 2024, un día después del inicio de la operación Perseo, parte del entonces gabinete ministerial del Gobierno Petro viajó hasta El Plateado para escuchar las demandas de la población. / Foto: Presidencia





02

EL CAÑÓN DEL MICAY:
ENTRE LA COCA, LA
DISPUTA ARMADA Y
LAS LIMITACIONES
HISTÓRICAS DEL
ESTADO

El municipio presenta además una compleja red de ríos y quebradas, entre ellos el río Micay y sus afluentes, que abastecen importantes cuencas hidrográficas y sostienen ecosistemas de alta fragilidad. Sus condiciones de alta pluviosidad, cobertura boscosa y diversidad de pisos térmicos favorecen la presencia de una notable variedad de especies de flora y fauna, lo que convierte al territorio en un corredor clave para la conectividad ecológica entre los Andes y el Pacífico colombiano (ver mapas No. 1 y 3).

Comprender los alcances y límites de la intervención impulsada por el Gobierno Petro en el cañón del Micay requiere partir de una premisa: el territorio no enfrenta únicamente un problema de control territorial. Se trata de una zona con características geográficas que han facilitado, por décadas, la economía cocalera, la regulación social por parte de los grupos armados y una presencia estatal fragmentada, intermitente y débil. En este contexto, cualquier estrategia de transformación enfrenta desafíos de enorme complejidad.

2.1. La economía de la coca como estructura económica y social del territorio

En Argelia, y particularmente en El Plateado, la coca no es solo un cultivo. Es el eje que organiza buena parte de la vida social y económica de sus habitantes. La evidencia recogida en terreno por la FIP muestra que una proporción considerable de los hogares depende, directa o indirectamente, de ingresos derivados de esta actividad. Alrededor de ella gira gran parte de la economía local —comercio, transporte, servicios, jornales y circulación de efectivo— (ver anexo No. 1.).

Esta realidad se observa al recorrer el trayecto entre el casco urbano de Argelia y El Plateado: las montañas están cubiertas, casi exclusivamente, por cultivos de coca, y es frecuente ver camionetas cargadas con bultos de hoja o laboratorios para la producción de pasta básica y base de cocaína a orillas de la carretera. Que estas actividades sean tan visibles, pese a su ilegalidad, no solo refleja su peso en la estructura económica local, sino también su incorporación a la vida cotidiana.



Laboratorio de producción de pasta y base de cocaína en El Plateado / Foto: Julián Ríos Monroy



Cultivos de hoja de coca en la vía Argelia-El Plateado / Foto: Julián Ríos Monroy

La coca también moldea las relaciones laborales y las trayectorias de vida. Familias enteras participan en distintas etapas de la cadena productiva; las mujeres y los jóvenes se vinculan tanto al cultivo como al procesamiento, y para muchos adolescentes, estas actividades representan el horizonte económico más visible ante la ausencia de alternativas educativas y laborales.

El arraigo de la coca en Argelia ocurre en un contexto de profundas precariedades estructurales. El municipio presenta altos niveles de pobreza multidimensional y de informalidad en la tenencia de la tierra (ver anexo No. 2). A ello se suma la limitada cobertura educativa y las barreras históricas de acceso a infraestructura, servicios y mercados legales. En estas condiciones, la coca se convierte para muchas familias no solo en una actividad rentable, sino en la opción más estable y viable de la que disponen, aun cuando no quisieran que las nuevas generaciones se vinculen a esta economía ni a los grupos armados.

En buena parte del país, quienes cultivan coca ven en esta actividad una vía de movilidad social: un ingreso que permite invertir en educación, mejorar la vivienda o sostener las labores de cuidado que recaen principalmente en las mujeres (Cuesta et al., 2017). Sin embargo, los indicadores económicos de Argelia muestran que la presencia prolongada de la economía cocalera no se ha traducido en mejoras generalizadas en la calidad de vida.

La coca también ha moldeado prácticas, normas e imaginarios que marcan la vida cotidiana, el tejido social y la cultura del municipio, como ocurre en otras zonas cocaleras del país. La tolerancia extendida hacia esta economía y la desconfianza frente al Estado —tanto en su voluntad como en su capacidad para ejercer autoridad y promover el desarrollo—, reflejan el desgaste de su legitimidad.

Como resultado, la cultura política del territorio se ha construido al margen del orden constitucional y en tensión con él, dando lugar a formas de gober-

nanza informal, que han ido variando según el grupo armado que ejerce control.

En síntesis, en el Micay la coca no opera simplemente como un cultivo ilícito disperso, sino como una economía organizada y articulada, resultado de décadas de presencia del cultivo sin intervenciones efectivas del Estado.

¿Por qué se desarrolló un enclave cocalero en Argelia?

El cañón del Micay es uno de los principales enclaves productivos de coca en el país. Su geografía montañosa facilita el acceso al Pacífico, lo que lo hace funcional para el narcotráfico; además, ha favorecido la presencia y el control de los grupos armados y ha limitado la presencia del Estado. A esto se suma una situación socioeconómica marcada por la pobreza estructural y una crisis humanitaria persistente, agravada por el conflicto armado.

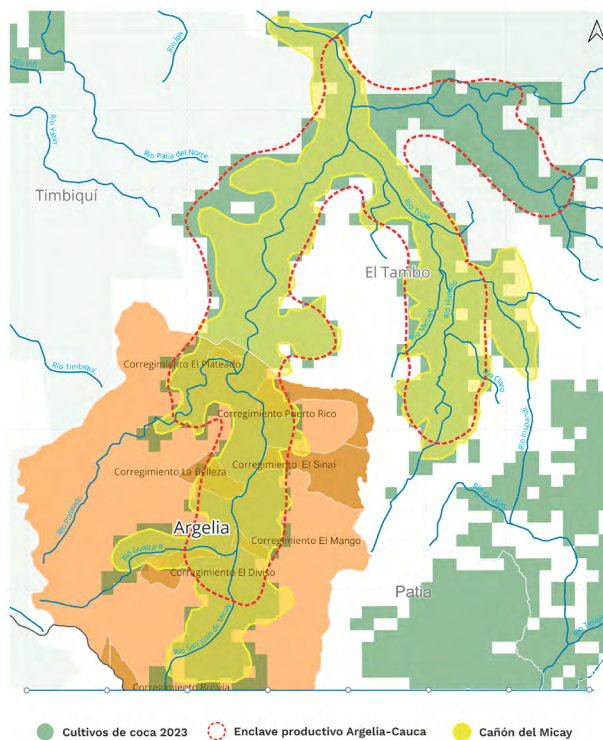
Según los informes de monitoreo de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el enclave Argelia-El Tambo concentra un área con 10.246 hectáreas continuas de coca, donde el cultivo se ha mantenido de forma sostenida, con alta productividad (ver mapa No. 3) y con control de toda la cadena productiva, desde la siembra hasta la transformación y comercialización. Esta dinámica se replica en otras 14 zonas del país que, en conjunto, concentran el 39 % de toda la coca detectada en 2023 (UNODC, 2025). De ellas, cuatro se ubican en el Cauca y ocho en la región Pacífico (ver mapa No. 4).

En estos enclaves, la economía de la coca opera como un mercado agroindustrial con niveles de rendimiento y articulación productiva superiores al promedio nacional. Esto explica que en zonas como el cañón del Micay se obtengan mayores rendimientos de la hoja y mayor capacidad de extracción de cocaína frente a otros territorios. Según UNODC, la capacidad para producir cocaína en la región Pacífico se multiplicó por cuatro en poco más de una década.

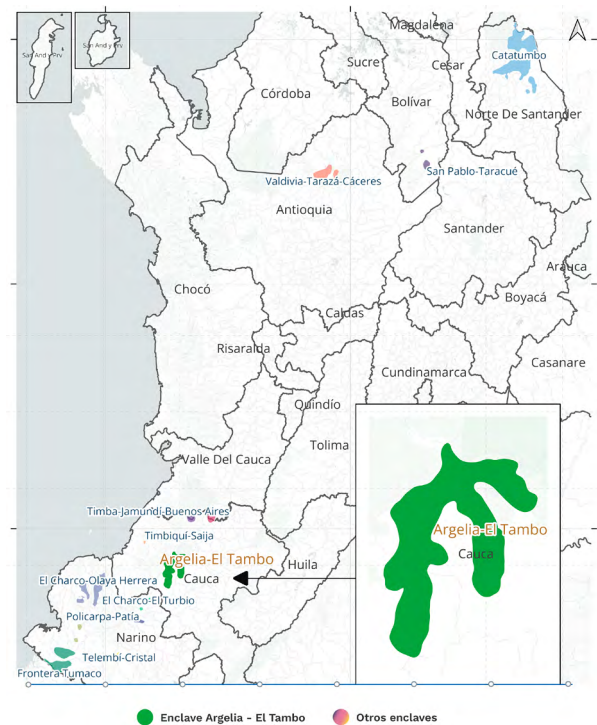
El enclave Argelia-El Tambo abarca parte de las 3.319 hectáreas con coca detectadas en 2023 en Argelia y de las 9.392 en El Tambo. Como ocurrió en el resto del país, estos cultivos iniciaron una etapa de expansión en 2014, lo que derivó en el aumento histórico registrado durante esta década a nivel nacional. No existen cifras oficiales sobre la cantidad de coca cultivada o de cocaína que podría producirse en El Plateado³, pero este corregimiento es reconocido como el área donde se concentran la mayoría de las actividades asociadas a la economía de la coca en Argelia.

En cuanto a productividad, UNODC señala que en la región Pacífico esta puede alcanzar las 11 toneladas de hoja por hectárea al año, mientras que el enclave Argelia-El Tambo supera las 12⁴, una cifra considerablemente mayor al promedio nacional de 8,5 toneladas. Aunque no se conocen datos oficiales sobre el rendimiento para la producción de cocaína en el Pacífico o en el enclave, la información disponible⁵ permite inferir que en Argelia se podrían producir entre 13 y 14 kg de cocaína por hectárea al año.

MAPA 3. CULTIVOS DE COCA EN EL CAÑÓN DEL MICAY



MAPA 4. ENCLAVES PRODUCTIVOS EN 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

³ También se identifica coca en los corregimientos de El Sinaí, El Mango, El Diviso, El Naranjal, Puerto Rico, La Emboscada, La Florida, Santa Clara, Betania, Bolivia y San Juan, y las veredas de Sinaí, Lomitas y veredas de El Plateado.

⁴ UNODC reporta datos de 2023 sobre rendimiento promedio de la hoja de coca en el enclave Argelia-El Tambo con los que se realizó este cálculo.

⁵ UNODC y el Ministerio de Justicia realizan estudios anuales de productividad y rendimiento de cultivos de coca en Colombia; sin embargo, los resultados se publican agregados, sin acceso a microdatos o desagregaciones completas. A partir de los parámetros metodológicos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de UNODC—en particular los factores de conversión entre hoja y clorhidrato de cocaína—y la información disponible sobre la región Pacífico y el enclave Argelia-El Tambo es posible construir una estimación indirecta.

La débil presencia estatal como factor determinante

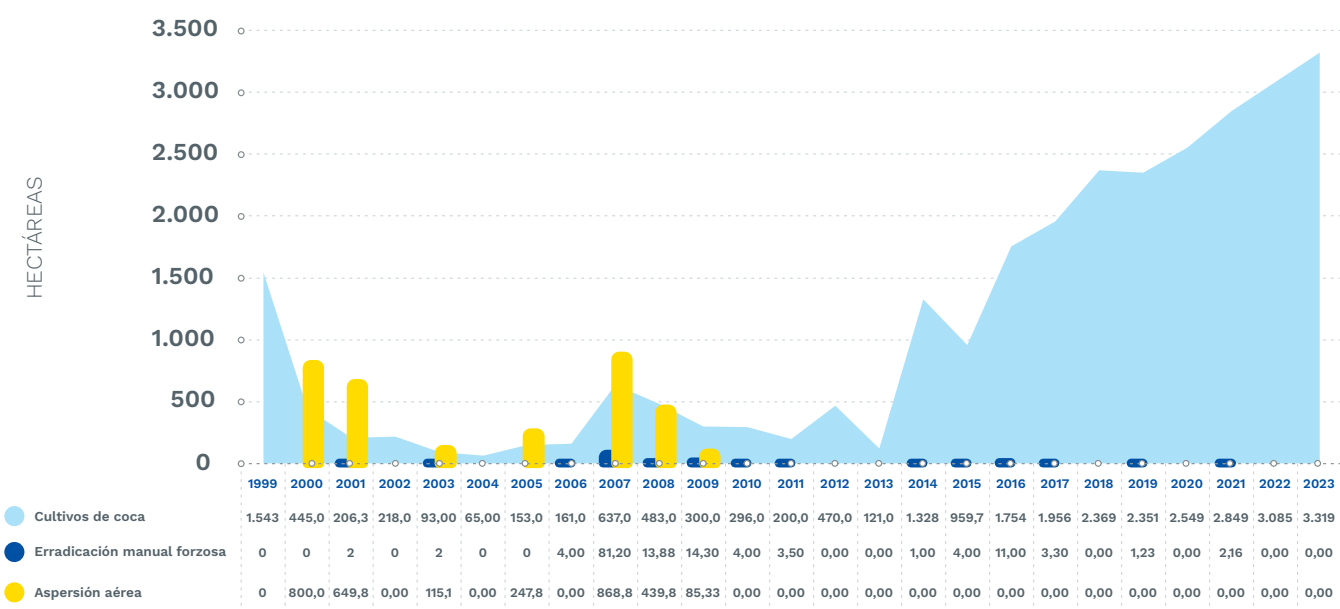
Como se ha señalado, en Argelia confluyen diversas condiciones que favorecieron la formación y consolidación del enclave productivo, entre las cuales la débil presencia estatal resulta decisiva. Esta debilidad se refleja tanto en el rezago socioeconómico del municipio como en la capacidad de los grupos armados para ejercer control territorial y regular la vida social y económica.

Más aún, el Estado ha terminado por tolerar –de facto– la economía de la coca debido a las limitaciones que enfrenta para controlar la zona. Según las entrevistas realizadas por la FIP, la población sabe que la Policía, el Ejército y, en general, el Estado “no se mete” con los cultivos, el transporte de la hoja de coca o con los laboratorios, pues las comunidades están dispuestas a reaccionar con paros o asonadas.

Los datos oficiales confirman esta percepción. Las actividades de erradicación en el municipio han sido casi nulas desde 2010 y fueron esporádicas en la década anterior. Tampoco hay registros de vinculación de familias del territorio en programas de desarrollo alternativo hasta 2024 (ver gráfico No. 1). En cuanto a las labores de interdicción, estas se concentraron en incautaciones de cocaína (ver gráfico No. 2) y destrucción de laboratorios en períodos específicos, pero sin continuidad (ver gráfico No. 3).

Durante la administración Petro, las actividades para reducir la producción y el tráfico de cocaína aumentaron ligeramente. Sin embargo, no existe evidencia de una estrategia orientada a este fin o a afectar la financiación ilegal de los grupos armados en el Micay. Paradójicamente, a finales de 2025, el Gobierno anunció que iniciaría la aspersión de cultivos de coca con glifosato mediante drones en Argelia, una medida que

GRÁFICO 1. ERRADICACIÓN DE LOS CULTIVOS DE COCA EN ARGELIA (1999-2023)



Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Observatorio de Drogas de Colombia

contradice los objetivos de su intervención en la zona y que, finalmente, no se ejecutó (Infobae, 2026).

En suma, la limitada presencia estatal y la ausencia sostenida de acciones efectivas contra el narcotráfico, al menos desde 2015, han sido factores decisivos en la consolidación de Argelia como enclave cocalero. Este

vacío institucional no solo ha permitido que la coca se convierta en el eje económico de las comunidades, sino que ha creado las condiciones para que los grupos armados — regulan la producción y la comercialización— ejerzan un dominio territorial que el Estado no ha logrado disputar de manera sostenida.

GRÁFICO 2. INCAUTACIONES DE COCAÍNA EN ARGELIA (2005-2025)

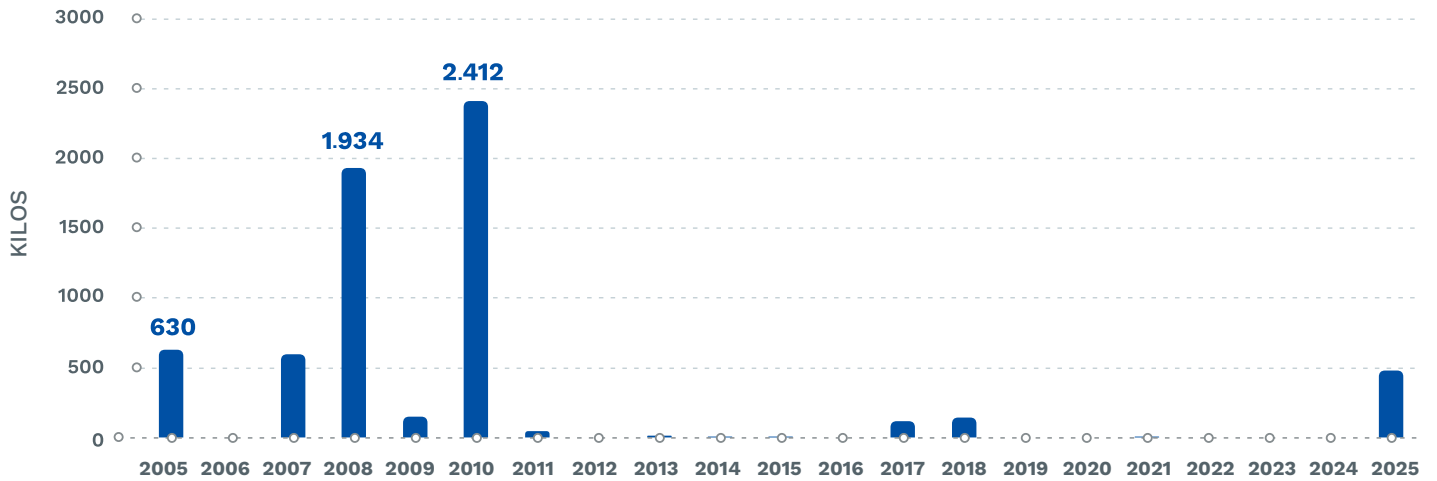
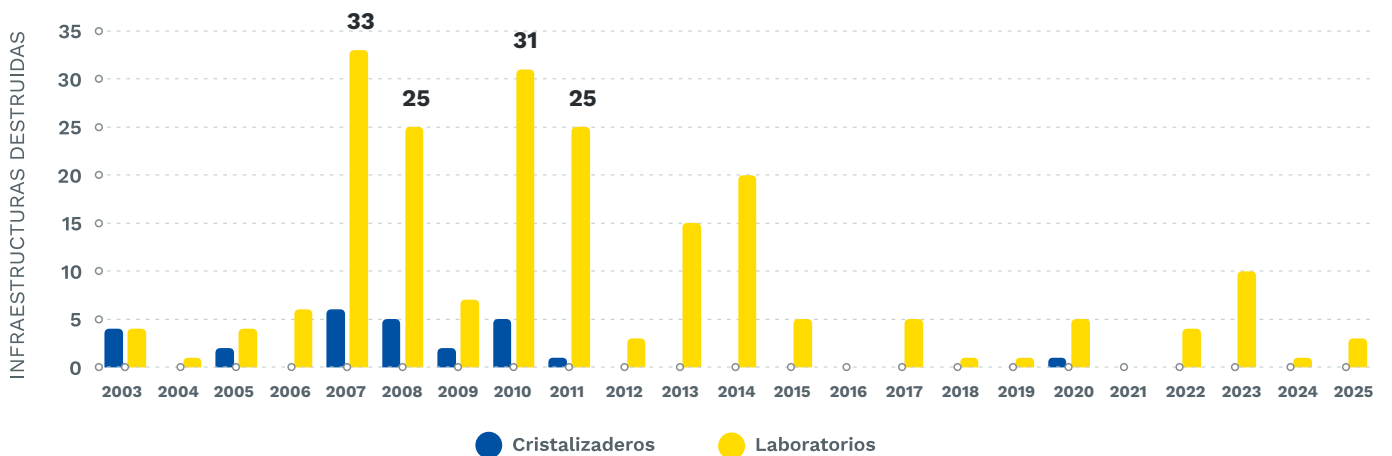


GRÁFICO 3. DESTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCCIÓN DE DROGAS EN ARGELIA (2003-2025)



Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Observatorio de Drogas de Colombia

2.2. El cañón del Micay, un territorio estratégico

La importancia del cañón del Micay para los grupos armados está directamente relacionada con su valor estratégico para las economías ilícitas. La región conecta corredores montañosos del Cauca con salidas hacia el Pacífico, lo que facilita el transporte de cocaína y la consolida como una posición clave para las cadenas del narcotráfico. Además, constituye un enclave productivo donde el cultivo de hoja de coca está fuertemente concentrado y la capacidad de producción de cocaína es excepcionalmente alta.

El Plateado es hoy el principal centro logístico y financiero del frente Carlos Patiño del EMC, que no solo controla y regula la economía local de la coca en Argelia, sino que mantiene vínculos con redes internacionales de narcotráfico y garantiza la seguridad y el transporte de cargamentos hacia la costa pacífica.

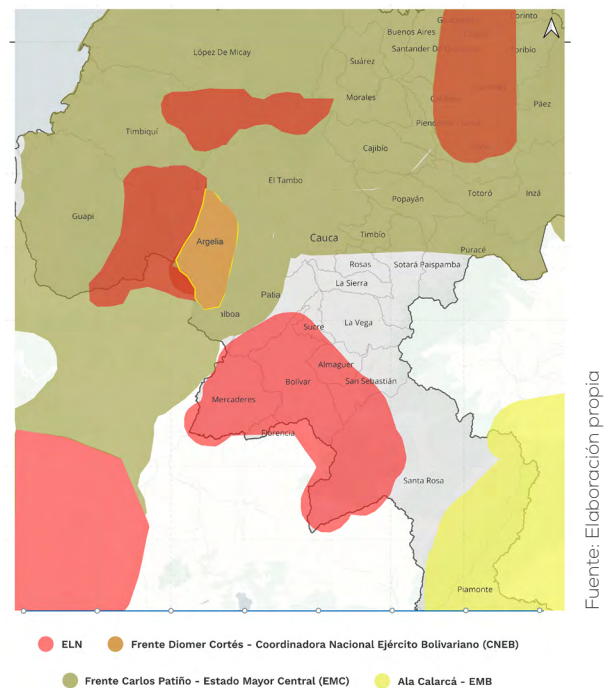
Esta estructura armada ejerce un dominio casi total sobre El Plateado y buena parte del cañón del Micay. Después de salir triunfante de la disputa que siguió a la dejación de armas de la guerrilla de las FARC en 2016 llegó a la zona en 2019 y consiguió establecerse en El Plateado entre 2021 y 2022, luego de expulsar al ELN y al frente Diomer Cortés, hoy vinculado a la CNEB.

Este dominio, que se consolidó entre 2020 y 2024 con una estrategia de control y violencia sistemática, incluyó patrullajes de miembros uniformados y armados, secuestros a plena luz del día (Johnson, 2024), amenazas, asesinatos y desplazamientos de habitantes y liderazgos sociales, extorsiones a cualquier actividad comercial o de compraventa, carnetización de la población y retenes permanentes en la entrada de El Plateado y las veredas cercanas.

En Argelia operan tres grupos armados, cada uno con niveles de influencia diferentes. Según registros de la Fuerza Pública, la estructura Carlos Patiño cuenta con 422 miembros, distribuidos entre Argelia —desde El Plateado hacia el norte— y los municipios de El Tam-

bo, Balboa, El Patía, Timbío, Rosas, La Vega y La Sierra. Por su parte, el frente José María Becerra del ELN suma 220 integrantes, mientras que el frente Diomer Cortés tiene 97 miembros y es una de las estructuras con mayor presencia en el municipio, particularmente en los corregimientos de El Mango y El Sinaí (ver mapa No. 5).

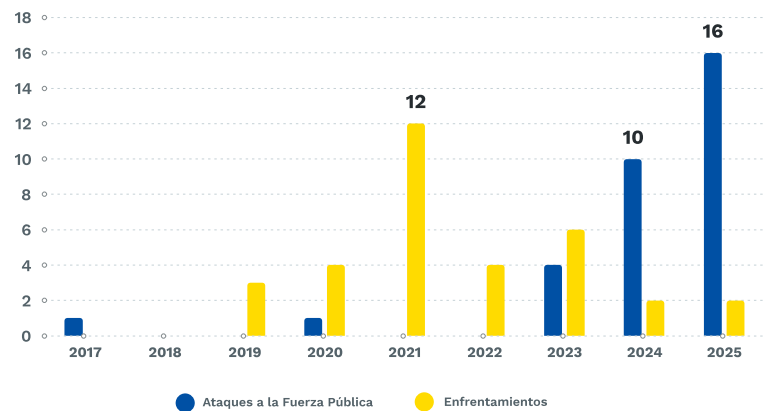
MAPA 5. INFLUENCIA DE GRUPOS ARMADOS EN ARGELIA EN 2025



Entre 2020 y 2024, la disputa entre los tres grupos se concentró en Balboa, Argelia y El Tambo, dejando a su paso desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios de líderes sociales. Solo en Argelia, según cifras de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 26.000 personas resultaron afectadas por estos hechos en esos cuatro años. La Defensoría del Pueblo identificó como epicentros de la confrontación la vereda Los Pinos (Puerto Rico), el entorno de El Plateado (veredas Hueco Lindo, Las Vegas, La Ceiba, Balastrera y Pepinal) y el sector conocido como “La Montaña” (Johnson et al., 2024) (ver gráfico No. 4).

Como resultado, entre 2020 y 2025, Argelia se ubicó como el segundo municipio de Colombia con mayor número de afectaciones humanitarias, con 60 eventos de desplazamientos forzados y 14 confinamientos (OCHA, s.f.) (ver gráfico No. 5). La violencia también golpeó a quienes ejercen liderazgo en el territorio. Con 16 asesinatos de líderes sociales, el municipio pasó a ocupar el sexto lugar a nivel nacional, según el seguimiento de la FIP (ver gráfico No. 6).

GRÁFICO 4. ACCIONES DE LOS GRUPOS ARMADOS (2017 - 2025)



Fuente: Seguimiento a acciones del Conflicto FIP

GRÁFICO 5. NÚMERO DE VÍCTIMAS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO Y CONFINAMIENTO

Fuente: Base de datos de Violencia armada de OCHA

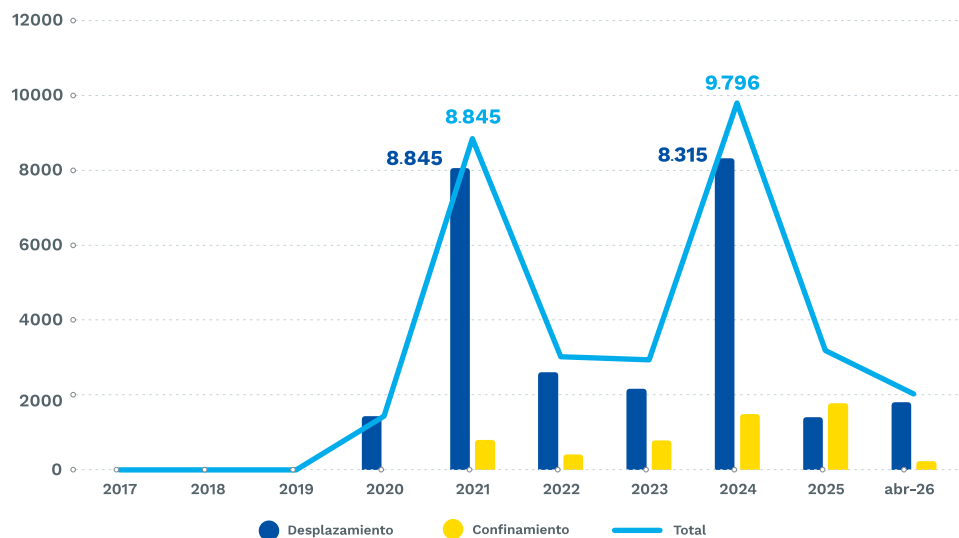
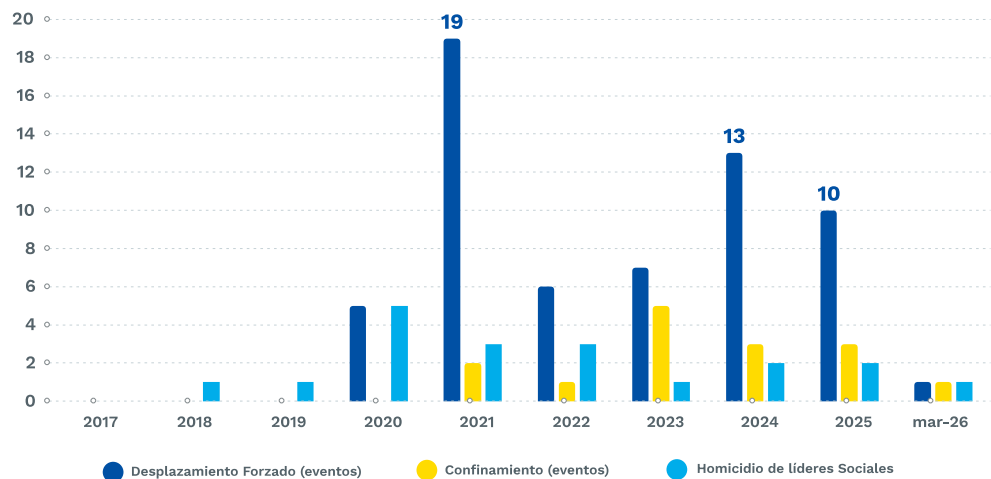


GRÁFICO 6. EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, CONFINAMIENTO Y HOMICIDIO DE LÍDERES

Fuente: Base de datos de Violencia armada de OCHA y seguimiento a agresiones a líderes y lideresas FIP



La Operación Perseo alteró parcialmente la correlación de fuerzas entre las estructuras armadas y contribuyó a reducir la crisis humanitaria. La presencia de las Fuerzas Militares funcionó como una barrera de contención que impidió la continuidad de la confrontación entre los grupos armados. La entrada de la Fuerza Pública obligó al frente Carlos Patiño a abandonar el casco urbano de El Plateado y a replegarse hacia los corregimientos que limitan con El Tambo. Sin embargo, este repliegue generó un efecto no previsto: mientras el Ejército concentra buena parte de su capacidad en El Plateado y en contener la respuesta violenta de esa estructura, tanto el frente Diomer Cortés como el ELN han ido ocupando corredores y veredas en la cordillera que antes controlaba el Carlos Patiño, en un intento de ganar terreno y ampliar su influencia sobre la población.

Según la Defensoría del Pueblo, el ELN ha sacado provecho de esta situación reactivando células urbanas de milicianos, lo que podría traducirse en un fortalecimiento de su capacidad operativa de cara a futuras ofensivas, especialmente si se considera el interés del frente Carlos Patiño de expandirse hacia la región del Macizo (Defensoría del Pueblo, 2025a). La Defensoría también advirtió que la población organizada en Juntas de Acción Comunal (JAC), consejos comunitarios y asociaciones campesinas enfrenta señalamientos de colaborar con uno u otro grupo armado, y padece amenazas, asesinatos y campañas de desprestigio que buscan debilitar su capacidad de incidencia colectiva.

Hoy por hoy, la violencia en el territorio no responde tanto a disputas entre los grupos armados, sino a la reacción del frente Carlos Patiño frente al avance de la Fuerza Pública. Esta estructura mantiene una estrategia de hostigamientos constantes y ataques con drones cargados de explosivos. Aunque van dirigidos contra las tropas, estos artefactos terminan afectando también a la población civil por su escasa precisión y difícil control. Solo entre enero y julio de 2025, la Fuerza Pública contabilizó 23 incidentes de este tipo. Entre los más recientes está un ataque del 29 de octubre de 2025

en la vereda La Hacienda, en El Plateado, donde ocho personas resultaron heridas, cinco de ellas menores de edad (Vidal, 2025). Tres meses después, el 27 de enero de 2026, otro ataque con explosivos lanzados desde un dron sacudió el casco urbano de ese corregimiento, dejando un civil muerto y 14 heridos (Infobae, 2026).

En contraste, durante este periodo ni el ELN ni el frente Diomer Cortés han protagonizado acciones ofensivas directas contra la Fuerza Pública, lo que sugiere que ambas estructuras están aprovechando el escenario actual para reposicionarse y ganar terreno a la espera de una mejor oportunidad.

El avance de la Fuerza Pública en El Plateado y los golpes a la comandancia del frente Carlos Patiño dieron lugar a alianzas temporales o pactos de no agresión en el cañón del Micay. Según actores del territorio y la Defensoría del Pueblo (2025a), inicialmente se habría configurado un acuerdo entre el Carlos Patiño, el frente José María Becerra del ELN y el frente Diomer Cortés, que frenó la confrontación entre ellos y permitió que el Carlos Patiño concentrara sus esfuerzos en enfrentar a la Fuerza Pública. Sin embargo, se trataría de un arreglo frágil y coyuntural. De acuerdo con las personas entrevistadas, continúan las tensiones por el avance del Diomer Cortés y del ELN sobre zonas que antes controlaba el Carlos Patiño, aunque hasta el momento no se han registrado nuevas confrontaciones entre estas estructuras.

Así las cosas, la Operación Perseo no desmontó el control territorial de los grupos armados, sino que lo reconfiguró. El frente Carlos Patiño perdió su dominio sobre el casco urbano de El Plateado, pero mantuvo —e incluso endureció— sus mecanismos de vigilancia y presión en las zonas rurales cercanas. Mientras tanto, el vacío dejado por su repliegue ha sido aprovechado por el Diomer Cortés y del ELN, que avanzan sobre corredores que antes controlaba el Carlos Patiño, lo que estaría generando nuevas presiones sobre las comunidades.

Este escenario evidencia que controlar militarmente el casco urbano de un corregimiento no equivale a controlar efectivamente el territorio. Las dinámicas de disputa siguen reconfigurándose y mantienen en alto riesgo a la población civil.

2.3. Gobernanza criminal y regulación de la vida cotidiana

Desde 2022, el frente Carlos Patiño consolidó en El Plateado un régimen de control social que combina coerción armada con dominio sobre las dinámicas sociales y económicas: regula la movilidad, resuelve conflictos cotidianos, impone normas de convivencia, determina la organización comunitaria y condiciona la relación de la población con las entidades del Estado.

Tras la Operación Perseo, esa disidencia mantiene su influencia en el centro poblado y en las zonas rurales. En El Plateado, el grupo pasó de ejercer control directo con hombres armados, a operar a través de una red de informantes, combatientes vestidos de civil y vigilancia estricta sobre quienes entran y salen del territorio, que incluye, la revisión de conversaciones en los celulares.

Este dominio sobre la población se ha traducido también en movilizaciones forzadas. Según testimonios recogidos por la FIP, la comunidad sabe que está obligada a atender los llamados del grupo para realizar asonadas. Así ocurrió en marzo de 2025, cuando una asonada en El Plateado terminó con la retención temporal de 29 integrantes de la Fuerza Pública —principalmente policías— por parte de civiles que actuaban bajo presión. La Defensoría del Pueblo, la ONU, la Iglesia y otros organismos mediaron para lograr su liberación dos días después, en medio de fuertes reproches del Gobierno nacional y la Procuraduría por la violación del Derecho Internacional Humanitario (Parada, 2025; Procuraduría General de la Nación, 2025). El patrón se repitió en junio, cuando otra asonada derivó en la retención de 57 militares por comunidades movilizadas en

El Tambo, episodio que el Ejército también atribuyó a coacción de las disidencias (Torrado, 2025).

Hoy, la influencia del frente Carlos Patiño se expresa mediante prácticas defensivas y selectivas, como la presión sobre líderes comunitarios que tienen contacto con instituciones, y los mensajes de intimidación que le permiten seguir regulando la vida cotidiana, aun cuando el Estado mantiene tropas dentro del corregimiento. En las áreas rurales hacia donde se replegó, el grupo aumentó las presiones sobre organizaciones sociales y liderazgos (Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas [SAT], s. f.), e impulsó que personas afines ocuparan cargos en las JAC y otras organizaciones, convirtiendo esos espacios en mecanismos de control comunitario.

Las operaciones militares también transformaron la estructura de mando y la relación con las comunidades. Las capturas y bajas de mandos medios produjeron un relevo casi total de la jefatura en la zona, ahora en manos de comandantes traídos de otras regiones del Cauca. Según los pobladores, estos nuevos jefes son más desconfiados y están menos dispuestos a respetar los acuerdos que las comunidades habían logrado con sus antecesores. Esto ha roto canales de comunicación que organizaciones sociales y actores humanitarios construyeron durante años, volviendo más volátil e impredecible la relación entre la comunidad y el grupo armado.

En contraste con estas transformaciones, la economía cocalera permanece intacta. Los testimonios recogidos en campo indican que la coca se sigue cultivando, procesando y transportando con normalidad, bajo la regulación que imponen los grupos ilegales.

A partir del último trimestre de 2025 se ha reportado una reducción importante en los precios de la hoja de coca, la pasta básica y la base de cocaína, pero esta caída no puede atribuirse a la intervención del Estado en el cañón del Micay. Desde finales de 2022, el mercado nacional ha experimentado cambios bruscos y pro-

longados cuyas causas no están del todo claras, aunque todo apunta a que la sobreoferta de coca y cocaína es el principal factor (ver anexo No. 3).

Esta radiografía revela uno de los principales desafíos de la apuesta estatal en el Micay: el Estado no enfrenta únicamente estructuras armadas, sino órdenes de regulación social y económica profundamente arraigados en el territorio. Si bien la presencia militar puede alterar parcialmente las dinámicas visibles de control, desmontar las formas de gobernanza criminal asociadas a la economía de la coca exige una estrategia diseñada específicamente para ese fin.

2.4. El Estado: un jugador más en la disputa por el Micay

Las dificultades del Estado para consolidar su gobernanza en el Cauca anteceden ampliamente la intervención del Gobierno Petro. Durante décadas, distintas administraciones han impulsado estrategias de seguridad, acciones contra el narcotráfico e inversiones sociales que han enfrentado obstáculos persistentes: baja capacidad institucional local, condiciones adversas de seguridad y limitada sostenibilidad de las intervenciones.

El Acuerdo de Paz de 2016 representó una de las apuestas más ambiciosas de transformación territorial en el departamento. Veinte de sus 42 municipios fueron priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), agrupados en las subregiones del Alto Patía y Norte del Cauca, y del Pacífico Medio. Sin embargo, su implementación ha enfrentado atrasos importantes, asociados a las mismas debilidades institucionales tanto a nivel nacional como local (García Villegas et al., 2016).

Algo similar ocurrió con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). En Argelia no se suscribieron acuerdos individuales de sustitución. Aunque 11.249 familias firmaron un acuerdo colectivo en marzo de 2018 (Castaño-Orozco, 2024), este no se

formalizó porque el municipio fue excluido de la fase de implementación. Dicha exclusión respondió tanto a decisiones presupuestales del Gobierno de Iván Duque como al contexto de violencia. Los grupos armados amenazaron a los campesinos y desplazaron del territorio a las familias dispuestas a cumplir el programa (Paredes-Londoño, 2025).

Este es el contexto de desconfianza en el que se enmarca la intervención del Gobierno Petro. En octubre de 2024, la Operación Perseo buscó generar las condiciones para el despliegue de una oferta estatal diversa en la región, cuyo componente central fue la sustitución de cultivos de uso ilícito. El Programa RenHacemos, liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI), opera como eje de la “estrategia de transformación territorial” (Fondo Colombia en Paz, 2024) con el objetivo de “impulsar el tránsito sostenible de economías basadas en cultivos de uso ilícito hacia economías lícitas y ambientalmente sostenibles” (Agencia de Renovación del Territorio [ART], 2025).

El programa articula erradicación voluntaria, pagos condicionados y apoyos productivos (kits, maquinarias, asistencia técnica y acciones de comercialización) mediante acuerdos de trabajo con las familias cultivadoras, un esquema similar⁶ al del PNIS, aunque con mayor énfasis en las cadenas de valor (ver anexo No. 4)

⁶ El PNIS se diseñó originalmente como un plan de dos años de ejecución directa por familia, aunque su vigencia institucional se proyectó a diez años. El beneficio económico total para cada núcleo familiar cultivador se estimó en 36 millones de pesos, distribuidos en el Plan de Atención Inmediata (PAI) así: 1. Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI): 12 millones pagados en efectivo durante el primer año (1 millón mensuales) para la subsistencia básica tras la erradicación. 2. Seguridad Alimentaria (Huertas caseras): 1.800.000 entregados en especie (insumos y herramientas) para el autoconsumo inmediato. 3. Asistencia Técnica Integral (ATI): 3.200.000 destinados al acompañamiento profesional para el diseño de proyectos productivos. 4. Proyectos Productivos de Ciclo Corto: 9 millones para cultivos que generen ingresos rápidos (frijol, maíz, hortalizas). 5. Proyectos Productivos de Ciclo Largo: diez millones para el establecimiento de cultivos permanentes (café, cacao, caucho) que garanticen la sostenibilidad a largo plazo.

A esto se sumaron los anuncios presidenciales sobre la compra de cosechas de hoja de coca.⁷

Entre las inversiones sociales de mayor visibilidad se encuentran la construcción del hospital de El Plateado —actualmente en ejecución, con una inversión de 22.458 millones de pesos— y la puesta en funcionamiento de un hospital móvil con servicios de segundo nivel, con un costo de 8.000 millones. También se anunciaron proyectos para pavimentar vías en la cabecera municipal y renovar la plaza de mercado del corregimiento.

Las autoridades locales y las comunidades reconocen la voluntad del Gobierno y destacan la disponibilidad de recursos para ejecutar estas iniciativas. La visibilidad que adquirió El Plateado tras la Operación Perseo, junto con la decisión de priorizar Argelia, ha facilitado la gestión de proyectos. Sin embargo, persisten problemas de coordinación: la falta de armonización entre los PDET, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes territoriales genera duplicación de esfuerzos (Defensoría del Pueblo, 2025).

A estos problemas se suman dudas sobre la capacidad del Estado de cumplir sus compromisos a tiempo. Estas nacen, en parte, de las demoras en la ejecución, pero sobre todo de una desconfianza acumulada. Líderes sociales fundadores de Argelia, particularmente de El Plateado, y miembros de las Juntas de Acción Comunal señalan que la cabecera del corregimiento fue construida por la propia comunidad, sin apoyo institucional.

Desde antes de la llegada de la coca a la región, a finales de los años 70, la población impulsó soluciones para atender necesidades básicas como el acceso

al agua, el alcantarillado, el ordenamiento territorial y la organización del comercio. Esta capacidad de autogestión se fortaleció posteriormente con las primeras bonanzas cocaleras y la regulación que las guerrillas impusieron sobre la vida comunitaria.

A pesar de esta desconfianza, las comunidades mantienen una percepción favorable del Gobierno actual, que se sustenta en avances concretos como las inversiones sociales en El Plateado y la presencia de entidades nacionales, pero, especialmente, en el cambio de enfoque. Una frase recogida en las entrevistas lo resume: “las Fuerzas Militares ya no vienen contra nosotros”. En un territorio cuya economía y tejido social se estructuraron en torno a la coca, la población asociaba las intervenciones anteriores con militarización exprés y erradicación forzada. El enfoque actual ha permitido que la presencia estatal se vincule con protección y oportunidades, no con pérdida de sustento y estigmatización. Este giro representa un logro que el Estado no había conseguido en décadas.

En síntesis, para la población, el Gobierno Petro ha cumplido su compromiso de proteger a las comunidades sin afectar su sustento económico. Esta percepción constituye un activo que contrasta con las dificultades que aún enfrenta el Estado para consolidar la gobernabilidad, como lo evidencia la capacidad de injerencia que mantienen los actores armados en el día a día de las comunidades.

En El Plateado, el frente Carlos Patiño sostiene una posición abiertamente contraria a la intervención estatal: restringe la entrada de instituciones, prohíbe la vinculación a programas, exige información a los líderes que viajan a reuniones con funcionarios y desconfía

⁷ En octubre del año pasado, el presidente Petro anunció que compraría las cosechas de hoja de coca en el corregimiento de El Plateado “mientras aparece la economía lícita”. Esta propuesta finalmente no se llevó a cabo. Era claro que los retos que implicaba que el Estado comprara la hoja de coca eran innumerables. Aunque la compra habría planteado una relación renovada de confianza entre el Estado y los cultivadores de coca, muy necesaria en esta región, que como tantas otras ha sentido lejano al Estado y ha sido víctima de numerosos incumplimientos, requería de desarrollos normativos, técnicos, procedimentales y administrativos que, además de exigir análisis jurídicos especializados, tomarían más tiempo del que le restaba en ese momento al actual Gobierno.

de quienes gestionan proyectos o ayudas. En cambio, el frente Diomer Cortés de la CNEB permite con mayor flexibilidad la entrada de instituciones y programas estatales, especialmente en el tramo entre Puerto Rico y la cabecera municipal de Argelia. El ELN muestra un comportamiento similar, ya que no impone restricciones evidentes a la presencia institucional.

Según información de campo y videos difundidos en redes sociales, los grupos armados de la región han entregado maquinaria, brindado apoyos económicos e impulsado la construcción de vías en zonas rurales. Con estas acciones y las narrativas que las acompañan, buscan disputarle la legitimidad del Estado.

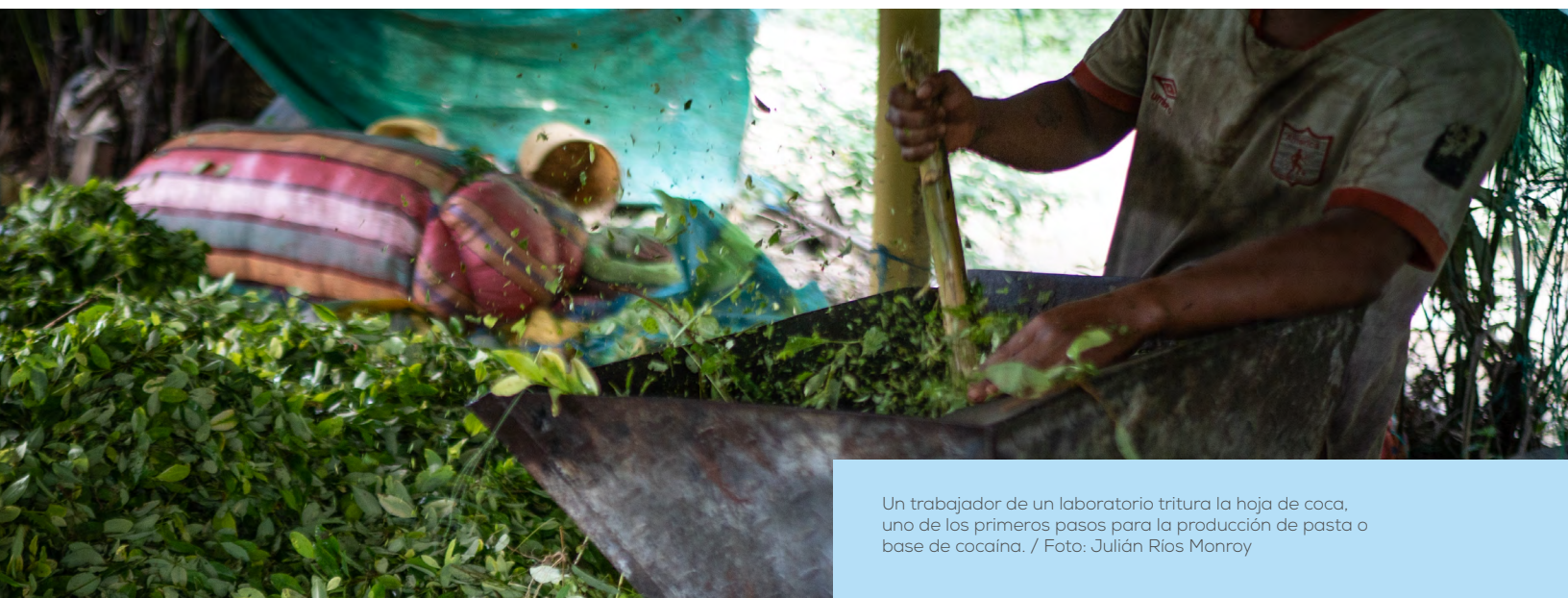
Así, las actividades de autoridades locales y entidades nacionales continúan, pero deben ajustarse a las dinámicas de seguridad que imponen los grupos. Por ejemplo, las ferias de servicios —en las que participan la Unidad de Víctimas, la Secretaría de Salud municipal, la Casa de Justicia y la DSCI, entre otras— se realizan de manera itinerante entre corregimientos y veredas, aunque con frecuencia quedan supeditadas a la autorización de los ilegales.

Debido a estas restricciones, la DSCI solo logró inscribir poco más de 100 familias en RenHacemos en El Plateado. La mayoría proviene de áreas rurales fuera de

la influencia del frente Carlos Patiño, cuya presión disuade la vinculación. No obstante, durante la última visita de campo de la FIP, en marzo de 2026, funcionarios de la DSCI y líderes comunitarios reportaron una mayor disposición a participar en el programa, atribuida a la caída de los precios de la hoja de coca y sus derivados desde diciembre de 2025 (ver anexo No. 3).

Lo anterior evidencia que, mientras la acción estatal siga siendo fragmentada, intermitente y desvinculada de las realidades locales, seguirá compitiendo —y no gobernando— con actores que ejercen control permanente sobre la vida de las comunidades.

Si bien la Operación Perseo y los programas que la acompañan han generado expectativas importantes —hasta el punto de que algunos sectores los consideran la primera muestra efectiva de presencia estatal en el territorio—, el Gobierno aún enfrenta limitaciones en coordinación, capacidad operativa y sostenibilidad. De no superarse, iniciativas como RenHacemos corren el riesgo de reproducir el patrón ya descrito: generar expectativas que terminan frustrándose ante la incapacidad de traducir los anuncios en transformaciones concretas y duraderas.



Un trabajador de un laboratorio tritura la hoja de coca, uno de los primeros pasos para la producción de pasta o base de cocaína. / Foto: Julián Ríos Monroy



03

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Conclusiones

La Operación Perseo marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad en el cañón del Micay: el Estado pasó de intervenciones esporádicas a un modelo de presencia sostenida orientado al control territorial.

La intervención logró modificar algunas dinámicas visibles de control armado y abrió una oportunidad para ampliar la presencia institucional. Sin embargo, persisten las disputas armadas, las economías ilícitas y las dificultades para generar transformaciones sostenibles.

Un efecto destacable es la modificación parcial de la geografía del conflicto. Se alteraron las condiciones de la disputa entre grupos armados, se forzó el repliegue del frente Carlos Patiño fuera de centros urbanos estratégicos como El Plateado, y disminuyó la afectación humanitaria. No obstante, las otras estructuras —el ELN y el frente Diomer Cortés— han fortalecido su presencia en corredores periféricos y profundizado sus mecanismos de control y coerción en zonas rurales.

La persistencia de la gobernanza criminal evidencia que el copamiento militar, aunque necesario, resulta insuficiente para garantizar la reconfiguración estructural del Micay. También señala que la intervención de la Fuerza Pública debe continuar y adaptarse a las estrategias de los grupos armados. La sostenibilidad de un esfuerzo integral como este depende de la capacidad del Estado para trascender la lógica de ocupación y consolidar una presencia legítima, permanente y efectiva.

La construcción de Estado en este territorio parte de una relación histórica marcada por la desconfianza. Para la comunidad, la institucionalidad ha tenido una presencia intermitente y predominantemente militar, asociada con impactos humanitarios negativos e intervenciones que no perduran. Más que un garante de bienestar, el Estado ha sido percibido como un actor más en la disputa por el control de la región.

La Operación Perseo representa un avance en la

construcción de confianza, pero esta sigue siendo frágil. Para amplios sectores de la población, la llegada del Estado continúa asociada no solo a la presencia militar, sino a políticas orientadas a eliminar la economía de la coca, su principal medio de subsistencia. Persiste la imagen de una institucionalidad que irrumpe, afecta a las comunidades y luego se retira sin consolidar su presencia, lo que plantea un desafío complejo para la formulación e implementación de políticas públicas.

Consciente de esta realidad, la administración Petro abordó los cultivos de uso ilícito en coherencia con su política de drogas (Ministerio de Justicia, 2023), que *“antepone de manera explícita objetivos de desarrollo, salud pública y derechos humanos a los propósitos tradicionales de reducir hectáreas de coca”*. Sin embargo, el anuncio —que finalmente no se materializó— sobre el regreso del uso del glifosato con drones en Argelia tensionó el enfoque de sustitución voluntaria promovido por el propio Gobierno.

Con todo, en la práctica, las comunidades cocaleras han percibido la presencia estatal a través de la oferta de la DSCI y la planeación de infraestructura crítica. Proyectos como el nuevo hospital de El Plateado y la adecuación vial hacia Argelia, representan iniciativas significativas para su transformación.

Ejecutar una intervención integral para la transformación territorial de Argelia y el cañón del Micay, basada en la convergencia entre seguridad y desarrollo, exige reconocer las dinámicas estructurales de la economía cocalera local. Sin intervenciones efectivas durante cinco décadas, la región se ha consolidado como un enclave productivo.

Esta realidad demanda una política pública que asuma la reducción de cultivos no como un acto aislado, sino como la desarticulación de un sistema de producción altamente especializado, arraigado, regulado por actores armados y determinante en la dinámica del territorio.

En ese sentido, el Micay, más allá de la Operación

Perseo, representa un proceso aún en construcción. Las capacidades, limitaciones y tensiones observadas por la FIP ofrecen lecciones relevantes para avanzar en una estrategia de transformación territorial. El principal desafío radica en articular segu-

ridad, legitimidad estatal, desarrollo económico y sostenibilidad institucional en una zona donde la economía de la coca y la gobernanza criminal siguen definiendo buena parte de la vida social y económica.



Un cultivo de café en medio de las plantaciones de coca del corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca. / Foto: Julián Ríos Monroy

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones se articulan bajo una lógica integral y territorial que combina acciones de protección a la población civil, contención de estructuras armadas, recuperación de la gobernabilidad, fortalecimiento institucional y desarticulación del sistema agroindustrial de la coca.

El desafío en el cañón del Micay trasciende el control territorial; es también una disputa por la legitimidad y la capacidad del Estado para ordenarlo. Por ello, resulta indispensable articular seguridad, justicia, desarrollo y presencia estatal sostenida. Se requiere una estrategia con intervenciones diferenciadas, capaces de responder tanto a las lógicas de gobernanza de cada estructura criminal como a sus distintas formas de reacción frente a la acción del Estado.

1. Cambiar el enfoque de la intervención

La Operación Perseo ofrece un punto de partida para diseñar una estrategia de intervención territorial más efectiva. Aunque su propósito inicial se centró en combatir al frente Carlos Patiño del EMC, la operación produjo efectos indirectos que merecen atención: cómo se dio la entrada al territorio, qué tipo de despliegue operativo se empleó, cómo se manejó el relacionamiento con las comunidades —incluida la decisión de no afectar de inmediato la economía de la coca— y qué acciones incidieron en la reconfiguración de las dinámicas entre actores armados. Este análisis no solo constituye la base para continuar la intervención en el Micay, sino que también aporta lecciones útiles para otras zonas de disputa donde se requiera trascender la lógica exclusivamente militar y priorizar la protección de la población, la reducción de daños y la generación de cambios sostenibles en las condiciones territoriales que alimentan la violencia.

Equilibrar la ofensiva con la reducción del impacto humanitario. La experiencia de Perseo demuestra

que, cuando la intervención militar no se centra exclusivamente en la ofensiva, sino también en proteger a la población, reducir la confrontación directa y limitar la capacidad de los grupos armados para afectar a las comunidades, es posible avanzar hacia una primera fase de estabilización. A partir de allí, pueden incorporarse acciones ofensivas y de disuasión más focalizadas contra los actores que persistan en el uso de la violencia, orientadas a recuperar el control territorial. En zonas de disputa, el objetivo debe ser disminuir el poder de todas las estructuras y cadenas vinculadas al crimen organizado; es decir, el blanco no debe ser un único grupo. De esta manera, el Estado se encamina a asumir el control territorial en lugar de trasladarlo de un actor ilegal a otro.

Construir confianza como clave de sostenibilidad. El éxito de una intervención integral en Argelia depende de la capacidad del Estado para convertir a las comunidades en aliadas estratégicas. Actualmente, existe un proceso incipiente de generación de confianza entre el Gobierno nacional y la población local, fruto de los primeros gestos de compromiso institucional. Sin embargo, este vínculo debe profundizarse mediante garantías de seguridad y el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos. Este enfoque no implica renunciar a las acciones de control, disuasión u ofensiva contra los grupos armados; por el contrario, busca dotar al Estado de la legitimidad necesaria para que estas resulten más efectivas y sostenibles.

2. Transitar de una estrategia de control territorial a la gobernanza territorial

De la lógica sectorial al enfoque territorial. La manera fragmentada y sectorizada en que opera el Estado constituye el principal obstáculo para sostener una intervención integral en el tiempo. Superar este esquema exige transitar hacia un modelo de

gobernanza territorial en el que la gestión se base en la coordinación multinivel y en la colaboración horizontal entre el Gobierno nacional y los entes territoriales. Si bien los avances del Gobierno actual reflejan la gestión individual de cada entidad bajo el mandato presidencial, estos carecen de un plan de acción coordinado que garantice el trabajo conjunto y la sinergia institucional en torno a objetivos claros de corto, mediano y largo plazo. Sin esta hoja de ruta, la intervención corre el riesgo de convertirse en un conjunto de acciones dispersas que no lograrán una transformación estructural del territorio.

Para avanzar en esta dirección, es necesario realizar un diagnóstico técnico de los compromisos y avances de los PDET y otros instrumentos de focalización, que permita ajustar las prioridades según lo que resulte viable operativamente y conforme a las condiciones de seguridad en el terreno. Asimismo, se debe dar continuidad a los programas que ya están en marcha (como los PDET y RenHacemos) y articularlos con los proyectos de infraestructura que se impulsan en la zona. Solo así se podrá asegurar la sostenibilidad de las inversiones y se evitará tanto la duplicación de esfuerzos como el reinicio de ciclos institucionales que erosionen la confianza de las comunidades.

Armonizar los instrumentos del ordenamiento territorial. La intervención estatal debe armonizar las múltiples herramientas de ordenamiento territorial que hoy coexisten, resolviendo la superposición normativa, los conflictos entre figuras de planificación y la falta de coordinación entre niveles de gobierno y sectores. Es clave clarificar quién es responsable de qué, cuál norma prevalece y cuál es el alcance de cada una —como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), la Ley 2ª de 1959 sobre las Zonas de Reserva Forestal, los PDET y otros mecanismos de planificación—. El objetivo es reducir la incertidumbre que frena la acción del Estado y genera confusión en el territorio. Para ello, se requieren canales claros de

coordinación y resolución de conflictos normativos, que permitan que el uso del suelo, la planificación ambiental y el desarrollo económico funcionen bajo criterios coherentes.

Trascender el enfoque de la sustitución de los cultivos de uso ilícito. El modelo histórico de sustitución de cultivos ha mostrado limitaciones estructurales para lograr que las economías ilícitas transiten hacia la legalidad. Si bien los avances del programa RenHacemos han sido importantes para reconstruir la confianza con las comunidades y vincular a familias cultivadoras de coca a procesos de desarrollo, el contexto actual exige ir más allá de la lógica de los acuerdos individuales. Es necesario adoptar un enfoque territorial que priorice la creación de condiciones que hagan viable el desarrollo. Esto implica garantizar la provisión de bienes públicos y, de manera fundamental, la seguridad jurídica sobre la tierra a través de la formalización de la propiedad, factor indispensable para atraer inversión privada y facilitar el acceso al sistema financiero. La sustitución puede contribuir a reducir los cultivos de coca, pero solo si se entiende como un componente de un proceso sostenido de construcción estatal.

Utilizar la erradicación voluntaria solo para algunos contextos. La erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito debe aplicarse de manera diferenciada, pues solo será eficaz en territorios donde el Estado pueda garantizar seguridad alimentaria e ingresos estables mediante una intervención integral que fortalezca la economía lícita. Donde el control de las estructuras armadas es total, la erradicación resulta ineficaz porque el acompañamiento institucional se dificulta o no es posible, y con ello las garantías que el Estado debe cumplirle a la comunidad. Por eso, solo hay que implementarla cuando sea funcional para lograr una reducción sostenida de los cultivos de coca.

Garantizar los compromisos del programa de sustitución RenHacemos. Los avances logrados por RenHacemos corren el riesgo de estancarse si no se respaldan con un acompañamiento técnico sostenido. La DSCI debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos para sacar adelante los modelos productivos pactados, mientras el Estado conecta estos esfuerzos con la provisión de bienes públicos y facilita la comercialización de los productos de las familias vinculadas. Esta es la forma de aprovechar la inversión pública y seguir construyendo confianza con las comunidades. La crisis de la coca que vivieron el país y el Cauca entre 2023 y 2024, junto con la reciente caída en los precios de la hoja y sus derivados, ha facilitado el acercamiento de las familias a los programas de sustitución. Sin embargo, la volatilidad actual del mercado ilegal hace difícil saber cuánto durará esta ventana de oportunidad, por lo que el interés y la adhesión de las comunidades dependerán de que el Estado cumpla lo prometido.

Proteger el tejido social y la autonomía comunitaria. El reconocimiento de la autonomía histórica de los habitantes de Argelia, quienes han gestionado sus propios servicios básicos ante la ausencia institucional, es clave para que el Estado construya legitimidad en el territorio. Para ello, debe asumir un rol de acompañante técnico que valide y fortalezca los activos sociales que ya existen, integrando la oferta institucional con las capacidades organizativas de la comunidad. Esto implica garantizar la protección de los liderazgos locales y las JAC frente a las presiones y vigilancia de los grupos armados, consolidándolos como agentes de su propio desarrollo. La experiencia del PNIS, en la que líderes sociales fueron asesinados por promover su implementación, debe servir como advertencia⁸.

3. No es contener, es desarticular el sistema agroindustrial de la coca

Las estrategias para reducir el narcotráfico se han concentrado en contener actividades específicas de la cadena. Aunque estas medidas han arrojado resultados en indicadores operativos, no han logrado afectar de fondo el funcionamiento del mercado. Además, la presencia estatal intermitente —o prácticamente ausente, como en Argelia durante las últimas dos décadas— ha permitido que este sistema se consolide y sofistique.

En este contexto, reducir los cultivos de uso ilícito o la producción de cocaína en el municipio exige debilitar el mercado ilegal con una intervención simultánea y sostenida sobre los distintos eslabones y dinámicas que lo configuran.

Sin embargo, una intervención integral de este tipo supera la capacidad actual del Estado, lo que hace fundamental adoptar un enfoque de focalización territorial estratégica. Esto implica priorizar áreas geográficas críticas donde se concentran las funciones productivas, logísticas y de regulación del sistema, y desplegar allí, de manera sostenida, los esfuerzos necesarios para afectar su funcionamiento. A continuación, se destacan las intervenciones más relevantes, sin que ello implique que constituyan la totalidad de lo necesario.

Reducir la productividad en el cultivo y procesamiento de la coca. Fortalecer las estrategias de gobernanza territorial y capitalizar los avances del programa RenHacemos ofrece una base para avanzar de manera gradual en la reducción de los altos rendimientos de los cultivos de coca. Esto implica contener nuevas siembras, disminuir la concentración

⁸ Diversas investigaciones han señalado que la implementación del PNIS pudo incrementar los riesgos para los liderazgos sociales en territorios cocaleros. Un estudio de Lucas Marín (2020) encontró que los acuerdos comunitarios del PNIS aumentaron la tasa de asesinatos de líderes sociales y la probabilidad de al menos un asesinato en 546% y 167%, respectivamente.

de cultivos en áreas colindantes que facilitan la logística y la integración vertical del sistema, y avanzar progresivamente en la reducción de los que ya existen.

Priorizar la afectación de la infraestructura de procesamiento. Es necesario identificar y dismantlar de forma sostenida los laboratorios de pasta básica y base de cocaína, así como los cristalizaderos donde se produce el clorhidrato de cocaína, para evitar que se reconfiguren rápidamente en zonas cercanas. Sin embargo, estas operaciones deben planearse estratégicamente, ya que, al afectar directamente la economía de la población, pueden alterar los procesos de construcción de confianza. También existe el riesgo de que generen resistencia comunitaria impulsada por los grupos armados, lo que comprometería la seguridad territorial.

Interrumpir los flujos de coca transformada, insumos y recursos financieros. Se deben focalizar las acciones de interdicción e incautación de pasta básica, base de cocaína y clorhidrato, así como de los insumos químicos utilizados para procesar la hoja de coca y su distribución en los corredores que conducen hacia el Pacífico. De igual forma, es necesario intervenir los flujos de dinero que los grupos armados y otros actores utilizan para pagar a cultivadores y procesadores.

Afectar circuitos financieros ilícitos. Se requiere diseñar una estrategia orientada a afectar las finanzas del sistema agroindustrial de la coca mediante el rastreo y bloqueo de flujos de capital, la reducción del efectivo ilícito circulante y la limitación de la reinversión en la economía local. Esto implica conocer mejor las estructuras financieras de los grupos armados y fortalecer las capacidades de inteligencia económica y financiera del Estado.



Algunas matas de plátano sobresalen entre un sembradío de hoja de coca en la zona rural de Argelia. / Foto: Julián Ríos Monroy

ANEXO 1. CARACTERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA COCA EN ARGELIA

De acuerdo con UNODC, en Argelia se cultivaron 3.300 hectáreas de coca en 2023 con un tamaño de lote promedio entre 0,97 y 1,44 hectáreas por familia (UNODC,2023), por lo que se estima que alrededor de 2.700 familias reciben ingresos de este cultivo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE,2018), Argelia tiene 27.464 habitantes y 7.690 hogares, lo que indicaría que el 35 % de las familias depende económicamente de la coca.

Sin embargo, el número de hectáreas cultivadas por familia varía según su ubicación. De acuerdo con información de campo, en el sur de Argelia una familia puede tener entre media y una hectárea sembrada, y hacia la “parte alta” (el norte) —desde el corregimiento de El Mango hasta El Plateado— esa extensión se amplía progresivamente. Según los entrevistados, en la zona limítrofe con El Tambo existen predios con siembras de cinco a diez hectáreas o más.

¿Cuál es la rentabilidad de la coca en Argelia?

Para obtener ingresos de una hectárea sembrada con coca en esta zona del país se requiere una inversión de entre 15 y 20 millones de pesos para cultivos nuevos, cuya primera cosecha se obtiene siete u ocho meses después de la siembra. El mantenimiento anual para optimizar el rendimiento del cultivo cuesta entre tres y cuatro millones de pesos. Ese rendimiento está entre 300 y 450 arrobas de hoja por cosecha, aunque puede aumentar dependiendo del clima y las condiciones del terreno, hasta 600 arrobas en El Plateado. Según algunos entrevistados, el valor de la inversión ha llegado a duplicarse debido al incremento en los precios de los agroquímicos.

Otro de los costos es la recolección de la hoja de coca, que puede oscilar entre cuatro y cinco millones de pesos por hectárea. El pago por arroba a un recolector o “raspachín” varía entre 10.000 y 15.000 pesos, según dinámicas de oferta y demanda o acuerdos sobre el suministro de alimentación por parte del dueño del cultivo. En un día, un raspachín puede recoger, dependiendo de su capacidad física y el estado del cultivo, entre ocho y 15 arrobas de hoja de coca. Esto representa un ingreso diario de 80.000 y más de 200.000 pesos. No obstante, según la información de campo, el ingreso promedio por jornada está entre 100.000 y 150.000 pesos en esta zona.

ECONOMÍA DE UNA HECTÁREA DE COCA POR COSECHA
COSTOS, PRODUCCIÓN E INGRESOS

1 INVERSIÓN EN EL CULTIVO

INVERSIÓN INICIAL PARA CULTIVOS NUEVOS
\$15.000.000 – \$20.000.000
Primera cosecha entre **7 y 8 meses** después de la siembra.

INVERSIÓN POR COSECHA PARA MEJORAR RENDIMIENTO
\$3.000.000 – \$4.000.000
Por cada cosecha.

RENDIMIENTO DEL CULTIVO POR COSECHA
300 – 450 arrobas

RENDIMIENTO POSIBLE
Hasta 600 arrobas
Según clima y condiciones del terreno; se reporta en corregimientos como El Plateado.

El valor de la inversión ha llegado a duplicarse en algunos momentos por el aumento de los precios de los agroquímicos.

2 RECOLECCIÓN DE LA HOJA DE COCA

COSTO DE RECOLECCIÓN POR HECTÁREA Y COSECHA
\$4.000.000 – \$5.000.000

PAGO POR ARROBA AL RECOLECTOR O “RASPACHÍN”
\$10.000 – \$15.000
Varía según oferta y demanda; en algunos casos se acuerda el suministro de comidas.

CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN POR DÍA
Según capacidad física y estado del cultivo:
8 – 15 arrobas
de hoja de coca.

SALARIO DIARIO ESTIMADO
\$80.000 – \$300.000
En territorio reportan que lo más común son **\$100.000 diarios**.

3 RESUMEN ECONÓMICO DEL CULTIVO POR COSECHA

PRECIO PROMEDIO DE LA ARROBA DE HOJA DE COCA	PRECIO ACTUAL REPORTADO	INGRESOS Y RENTABILIDAD POR COSECHA			
\$60.000 por arroba.	Según el trabajo de campo de diciembre: \$35.000 por arroba.	300 – 400 arrobas por hectárea	\$12.000.000 ingreso promedio por venta	\$7.000.000 inversión total estimada	\$5.000.000 rentabilidad por cosecha

Un cultivador puede ganar **\$5.000.000** por hectárea cultivada o cerca de **\$7.000.000** si la transforma en pasta básica o base de cocaína.

4 TRANSFORMACIÓN A PASTA BÁSICA O BASE DE COCAÍNA POR COSECHA

PRODUCCIÓN DE HOJA	RENDIMIENTO DE EXTRACCIÓN	PRECIO DE VENTA ACTUAL	INSUMOS QUÍMICOS	RENTABILIDAD APROXIMADA
300 – 450 arrobas por cosecha.	20 gramos de pasta básica o base de cocaína por arroba de hoja.	\$2.500 por gramo. Total estimado: \$50.000 por arroba . Alrededor de \$18.000.000 por cosecha.	\$4.000.000 costo aproximado.	\$7.000.000 por hectárea y cosecha, incluyendo inversión, recolección e insumos.

5 PROCESAMIENTO Y COMPARACIÓN DE RENTABILIDAD

PERSONAS QUE SOLO PROCESAN LA COCA Compran la hoja a los cultivadores y la procesan para obtener pasta básica o base de cocaína. \$2.000.000 Ganancia estimada por cosecha.	Escenario	Inversión total	Ingreso total promedio	Rentabilidad neta
	Venta de hoja de coca	\$7.000.000 3 millones cultivo + 4 millones recolección	\$12.000.000 300–400 arrobas a \$35.000	\$5.000.000
	Venta de pasta básica o base de cocaína	\$11.000.000 cultivo, recolección e insumos	\$18.000.000 300–400 arrobas a \$18.000 por arroba	\$7.000.000

Notas importantes: Los rendimientos pueden aumentar según el clima y las condiciones del terreno, llegando incluso a 600 arrobas por cosecha en zonas como El Plateado. Los costos e ingresos pueden variar según dinámicas locales. La inversión en el cultivo ha llegado a duplicarse en algunos momentos por el aumento de los precios de los agroquímicos.

Según los productores de coca de la región, el punto de equilibrio para evitar pérdidas oscila entre 40.000 y 50.000 pesos la arroba. Sin embargo, tras la reciente caída en los precios, los campesinos coccaleros están recibiendo apenas 35.000 pesos. A ese valor, una familia que cosecha entre 300 y 400 arrobas puede venderlas por 12 millones de pesos en promedio. Descontando los siete millones de inversión (cuatro millones en el cultivo y tres en la recolección) la rentabilidad se reduce a cinco millones de pesos por cosecha cada tres meses.

El panorama cambia si el cultivador decide transformar la hoja en base de cocaína. Este proceso requiere insumos químicos⁹ por cuatro millones de pesos. De cada arroba se pueden extraer cerca de 20 gramos de pasta básica o base de cocaína, que se están vendiendo actualmente a 2.500 pesos cada uno, para un total de aproximadamente 18 millones de pesos por arroba, lo que eleva la rentabilidad a 14 millones de pesos por cosecha. Sin embargo, al restar las inversiones necesarias para el cultivo y el procesamiento, la ganancia es de 2 millones.

En otras palabras, mientras la venta de hoja deja cinco millones de pesos por hectárea, la transformación a pasta o base de cocaína puede generar siete millones. Para quienes solo procesan la coca, sin cultivar, la ganancia por arroba es de dos millones de pesos.

¿Quiénes participan en la economía de la coca?

La participación de la población en esta economía no se limita al cultivo; también incluye la recolección, el transporte y el procesamiento de la hoja de coca para su transformación en pasta básica o base de cocaína. En consecuencia, todos los miembros de una familia pueden estar vinculados a esta actividad, tal como sucede con cualquier otra economía familiar en distintas regiones del país.

En Argelia, la FIP constató que las mujeres participan en todas las etapas de la cadena: desde el cultivo hasta la recolección y el procesamiento. Trabajan en sus propios predios o jornalean en fincas ajenas. Antes su rol se concentraba en administrar el cultivo, incluyendo la alimentación y el pago de los trabajadores; hoy hacen “lo que les salga”, lo que refleja una mayor participación en todas las actividades, muchas veces, acompañadas de sus hijos pequeños.

Los jóvenes se vinculan a esta economía desde temprana edad, trabajando en los cultivos de sus familias o en fincas vecinas. Entre las distintas actividades, la

⁹ Para la producción de cocaína se emplean diversos insumos químicos como gasolina, cemento, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y permanganato de potasio para su transformación. Sin embargo, según la información recopilada en campo, algunas variedades de hoja de coca como “la guayaba”, que se cultiva en este momento, no necesitan permanganato de potasio para su transformación. Existe información anecdótica sobre la producción clandestina de este último — conocido como “perga” — en esta zona del Cauca. En ese departamento se han documentado mineralizaciones de manganeso, incluida la pirolusita, que constituye la principal materia prima para su producción industrial.

recolección es la más deseada porque es la mejor pagada. Se trata de una labor que parece sencilla en términos de tiempo: comienza al amanecer y termina hacia el mediodía, y bien remunerada en comparación con otras labores agrícolas. Sin embargo, “raspar” la coca lesiona la piel de las manos y requiere resistencia física porque los cultivos en esta región suelen estar en zonas montañosas de alta pendiente. Desde allí, en muchos casos, hay que sacar los bultos de la hoja hasta las carreteras por caminos inclinados y en mal estado.

A la orilla de las carreteras se ubican algunos laboratorios para la transformación de la hoja de coca en pasta básica y base de cocaína, aunque también hay laboratorios en las fincas donde se cultiva. A diferencia de lo que ocurre en otras regiones, los laboratorios que están en la carretera no pertenecen a familias cultivadoras, sino que operan como centros de procesamiento donde personas dedicadas exclusivamente a esta actividad compran la hoja de coca a los campesinos, la transforman y venden el producto.

De acuerdo con una persona entrevistada, las familias prefieren dedicarse al cultivo porque es su costumbre. Sin embargo, las que tienen sus fincas lejos de estos “centros de procesamiento” deben hacerlo ellas mismas. “Por ejemplo, en La Florida y La Montaña (vereda de San Juan de la Florida) todas las fincas tienen su laboratorio porque allá no hay quien compre. Allá sí tienen que saber “echar química””, dice un habitante de Argelia.

Finalmente, están los cristalizaderos, en los que no participan las familias. Conocidos como “cocinas” en este territorio, son laboratorios móviles y clandestinos en los que se produce cocaína a partir de la pasta básica o de la base de cocaína. Estos centros de producción, controlados actualmente por los grupos armados, se instalan una vez se reúne una cantidad importante de base de cocaína, y allí se congrega un grupo de personas integrado por un químico (profesional o empírico) y auxiliares que apoyan el proceso.

En estas cocinas existe una división del trabajo clara: cada rol —oxidador, secador, desgomador, filtrador, bombero, hamaquero, presa, calibrador de peso, horno y empaquetado, todos bajo la supervisión del químico— tiene una función específica y una remuneración que oscila entre los 2.000 y los 20.000 pesos por kilogramo del producto final, dependiendo del grado de responsabilidad y cono-

cimiento que demanda cada etapa.

El siguiente testimonio ilustra la dinámica de trabajo en estos lugares:

“Muchos de los que trabajamos en la cocina empezamos raspando hoja, luego pasamos a un laboratorio y de ahí ya saltamos a una cocina. Esa es la aspiración de todos, porque se sabe que es donde pagan bien, pero muy poquitos llegan ahí porque toca ganarse la confianza del dueño, no hay de otra. La gente dice que es plata fácil, pero no: son jornadas muy duras, cuatro o cinco días trabajando casi sin dormir, máximo una o dos horas al día. Nadie puede tener celulares ni ninguna distracción. El trabajo no puede parar porque hay que cumplir con las fechas, y además son muchas personas trabajando ahí, eso sí, con muy buena comida. Allá se ve la mejor alimentación, le dan lo que quiera y el mecato que quiera, pero así mismo toca producir (...) El salario depende de lo que se produzca: si son 200 kilos, según su cargo, usted puede ganarse entre 6 y 40 millones. Al final la nómina de una jornaleada de esas puede valer fácilmente 150 millones de pesos”.

Entrevista, 26 de marzo de 2026.

La producción de cocaína no solo garantiza ingresos superiores frente a los de tareas más exigentes físicamente, como la recolección, sino que además facilita un vínculo directo con “los patrones” y su entorno cercano. Entre ellos se encuentran, incluso, miembros de grupos armados, quienes actúan como “veedores” de la calidad del producto según las exigencias de comerciantes y compradores internacionales.

Otros testimonios recolectados subrayan la exclusividad de este rol: “las cocinas están relacionadas con los grupos de la guerrilla. Los vigilantes son milicianos. Los que trabajan son los más allegados. Tienen galladas. No es cualquiera.

ANEXO 2. PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES Y DE ACCESO A LA TIERRA EN ARGELIA

En Argelia, según el DANE, el 50,1 % de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional (DANE, 2020) y el 23,4 % presenta necesidades básicas insatisfechas (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2024). A nivel rural, este último índice es más elevado y El Plateado registra el valor más alto de la región (26,6).

Al observar la evolución del indicador de necesidades básicas Insatisfechas (NBI), el municipio registraba valores superiores al 80 % en la década de 1990 y cercanos al 100 % en el censo de 2005, lo que lo ubicaba entre los territorios con mayores rezagos estructurales del país. Si bien no se dispone de una serie estrictamente comparable para años posteriores —dado que el NBI dejó de ser el principal indicador en los últimos censos—, mediciones más recientes, como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), confirman la persistencia de estas condiciones de vulnerabilidad social.

La cobertura educativa neta en primaria se sitúa en torno al 82 %, en secundaria ronda el 65 % y en educación media desciende a aproximadamente el 36 % (Gobernación de Cauca, 2021). Estas brechas revelan una pérdida significativa de estudiantes a medida que avanzan en el ciclo educativo; solo una fracción logra culminar sus estudios y, en consecuencia, el acceso a la formación técnica o universitaria resulta aún más limitado.

En cuanto a la tenencia de la tierra, la situación refleja igualmente una profunda precariedad: el índice de informalidad de la tierra alcanza el 82 % (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria [UPRA], 2024), cifra que supera ampliamente el promedio departamental (66 %). Esta inseguridad jurídica se agrava por una extrema concentración de la propiedad, reflejada en un coeficiente de Gini superior a 0,79 (Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2025), indicador que confirma una desigualdad crítica en la distribución del suelo.

ANEXO 3. LA CRISIS DE LA COCA A NIVEL NACIONAL Y EN EL CAUCA

Desde inicios de 2022 hasta mediados de 2024, todas las regiones cocaleiras de Colombia experimentaron un cambio brusco en la comercialización de la hoja de coca y sus derivados. Aunque en otros periodos también se han registrado fluctuaciones importantes en los precios, esta “crisis de la coca” se vivió como una fuerte recesión en la que los precios cayeron hasta un 50 % y los compradores prácticamente desaparecieron. Ante este escenario, quienes cultivaban dejaron de cosechar, mientras que quienes procesaban optaron por almacenar los fardos de pasta básica a la espera de una eventual recuperación. En algunas zonas, incluso con autorización de los grupos ilegales, la población recurrió al trueque en tiendas

o mercados locales, utilizando la pasta como moneda de cambio para acceder a productos de primera necesidad.

Esta situación atrajo la atención de diversos actores. Los medios de comunicación informaron sobre los efectos en la población, y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) realizó dos estudios para evaluar su impacto en la seguridad alimentaria de los territorios con coca. Organizaciones sociales, académicos e investigadores también se volcaron a examinar las causas del fenómeno (FIP, 2025). Sin embargo, la naturaleza ilegal del negocio de la cocaína dificulta caracterizar con precisión este mercado y comprender en profundidad sus dinámicas.

Para la FIP, el crecimiento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína registrado en el país desde 2014 ha generado una sobreoferta que podría explicar esta crisis. De hecho, el relato de uno de los entrevistados respalda esta tesis. Según él, la introducción de nuevas variedades de coca durante los últimos 15 años ha mejorado significativamente la productividad: una hectárea que antes rendía 80 arrobas hoy puede producir hasta 450. En su opinión, esta sobreoferta es la principal causa de la caída de los precios, tanto en 2022 como en la actualidad.

Para explicar esta crisis se han planteado otras hipótesis: el aumento del consumo de fentanilo en Estados Unidos; cambios en políticas públicas o en estrategias de control estatal (por ejemplo, el cierre de rutas del narcotráfico tras modificaciones en mandos estratégicos de las Fuerzas Militares o el incremento de las incautaciones de cocaína); y situaciones coyunturales, como las disputas territoriales entre grupos armados. Sin embargo, no existe sustento empírico suficiente para validarlas.

En el Cauca, la variación de los precios fue particularmente significativa. Desde finales de 2023, la arroba de hoja de coca, que generalmente se vendía entre 60.000 y 70.000 pesos, llegó a comprarse por apenas 25.000, dejando a las familias con menos de la mitad de sus ingresos habituales. La pasta básica y la base de cocaína también redujeron su valor cerca de un 50 % y el gramo pasó a venderse entre 1.300 y 1.800 pesos. Hacia julio de 2024, en Argelia se reportó un repunte de los precios (El País, 2024). Entonces cobró fuerza la idea de que este incremento respondía a una decisión del EMC, tras el anuncio del presidente Petro de comprar la hoja en El Plateado. Aunque no existen pruebas que respalden esta teoría, es poco probable que la crisis de la coca se deba a una decisión de las disidencias o que les resultara funcional.

Actualmente, el Cauca y buena parte del país enfrentan una nueva caída de los precios que inició entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Esta situación habría motivado a muchas familias que dependen de este cultivo a vincularse al programa de sustitución del Gobierno Petro. Hasta el momento, no se conocen estudios que analicen la relación entre esta nueva crisis y la minería ilegal en el Cauca o en otras regiones.

ANEXO 4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA RENHACEMOS EN ARGELIA (2025-2026)

RenHacemos contempla un plan de atención que ofrece alternativas económicas a las familias que abandonen los cultivos de coca. En Argelia, la DSCI realiza una inversión de 8.700.000 pesos por núcleo familiar, que incluye pagos mensuales durante el primer año para compensar la ausencia de ingresos tras la erradicación de la coca. En total, el presupuesto proyectado para 2025 y 2026 asciende a casi 50.000 millones de pesos, a través de tres componentes (DSCI, 2025):

- Sustitución de ingresos: recuperación de la confianza, erradicación manual voluntaria de cultivos y entrega de activos menores para garantizar la seguridad alimentaria. En esta etapa, la persona inscrita recibe un apoyo económico inicial de dos millones de pesos y tres pagos mensuales de 900.000.
- Sustitución de economías: consolidación de proyectos productivos de ciclo largo y provisión de bienes y servicios para “afianzar economías que faciliten la transformación y fortalecimiento integral del sector productivo local, con la visión de generar una transición de la economía ilícita a la lícita”.
- Bienes complementarios: desarrollo de infraestructura para la transformación y el fortalecimiento de las cadenas de comercialización y logística, con el propósito de “robustecer el encadenamiento productivo completo” y “brindar las condiciones que garanticen su sostenibilidad”.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la DSCI había logrado inscribir a cerca de 800 familias en el programa, de las cuales más de 400 ya estaban listas para iniciar su proyecto productivo de ciclo largo. Si se considera que cada familia en este territorio cultiva en promedio entre 0,97 y 1,44 hectáreas de coca, estos avances podrían representar la erradicación de aproximadamente 500 hectáreas como resultado directo de la implementación del programa.

Según funcionarios de la DSCI entrevistados para este estudio, la mayoría de las familias ha optado por el café como proyecto productivo principal, mientras que alrededor del 20 % ha elegido el cacao. El programa también financia el cultivo de plátano, que proporciona sombra al café, así como los de frijol y maíz como proyectos de ciclo corto. Estos últimos generan ingresos cada tres o cuatro meses, lo que permite a las familias compensar el tiempo de espera que requiere la primera cosecha de los productos principales. Además, la DSCI brinda asistencia técnica a cada núcleo familiar durante dos años.

En cuanto a infraestructura y servicios, la entidad está desarrollando 13 beneficiaderos para el lavado y secado del café, una planta torrefactora para su tostión y empaque, y varios tramos de placa huella para mejorar la conectividad rural. A esto se suman gestiones para articular la oferta institucional del Gobierno nacional en Argelia, además de procesos de formación en asociatividad y cooperativismo.

Los logros del programa RenHacemos son significativos porque, de mantenerse el ritmo actual, en menos de dos años el Gobierno Petro habrá contribuido a crear condiciones propicias para la generación de ingresos a partir de líneas productivas tradicionales en Argelia. Esto incluye asistencia técnica para el cultivo y la producción, infraestructura para la transformación de productos, así como el fortalecimiento del tejido asociativo y la recuperación de la confianza de la población en el Estado.

No obstante, estos avances difícilmente podrán consolidarse como alternativas productivas viables para reemplazar o complementar la economía de la coca si no existe un compromiso sostenido del Estado, tanto en términos financieros como técnicos.

INFOGRAFÍA: DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS (DSCI)



Infografía Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Marzo 3, 2025.



REFERENCIAS

Referencias

- Agencia de Renovación del Territorio [ART]. (2024).** Ficha municipio Argelia – Subregión Alto Patía y Norte del Cauca. Central PDET. <https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/>
- Agencia de Renovación del Territorio [ART]. (9 de abril de 2025).** Resolución 076 de 2025: Por la cual se crea el programa RenHacemos para la sustitución sostenible de cultivos de uso ilícito para el tránsito a economías lícitas. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30054829>
- Arboleda, D. (2017).** Economía de la coca y violencia: realidades desde el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca (Colombia). Campos en Ciencias Sociales, 5(1-2), 39-72. <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/campos/article/view/3536/0>
- Bravo, N. (6 de enero de 2020).** La estrategia de Duque no logra descifrar la nueva violencia del Cauca. La Silla Vacía. <https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/pacifico/la-estrategia-de-duque-no-logra-descifrar-la-nueva-violencia-del-cauca/>
- Calderón, F. (21 de febrero de 2025).** Policías y soldados son atacados con explosivos lanzados desde drones en El Plateado, Cauca. <https://www.elpais.com.co/judicial/policias-y-soldados-son-atacados-con-explosivos-lanzados-desde-drones-en-el-plateado-cauca-2117.html?utm>
- Cambio. (2 de septiembre de 2022).** El gran operativo militar que busca recuperar el control del Cañón del Micay. <https://cambiocolombia.com/conflicto-armado-en-colombia/articulo/2025/10/un-ano-de-la-operacion-perseo-presencia-militar-pero-escasa-accion-del-estado/>
- Cambio. (11 de octubre de 2025).** Un año de la Operación Perseo: presencia militar, pero escasa acción del Estado. Cambio. <https://cambiocolombia.com/conflicto-armado-en-colombia/articulo/2023/9/el-gran-operativo-militar-que-busca-recuperar-el-control-de-canon-del/>
- Caracol Radio. (6 de noviembre de 2022).** “Todo lo que sucedió en El Plateado fue un secuestro”: Mayor Andrés Mahecha. <https://caracol.com.co/2023/11/06/todo-lo-que-sucedio-en-el-plateado-fue-un-secuestro-mayor-andres-mahecha/>
- Castaño-Orozco, C. S. (2024).** Desafíos de la paz territorial en el suroccidente colombiano: ¿cómo el campesinado hace frente a la promesa gubernamental? Trabajo Social, 26(2), 173-187. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9650800.pdf>
- Comando General de las Fuerzas Militares. (12 de octubre de 2024).** Fuerzas Militares lanzan Operación Perseo para recuperar El Plateado – Cauca. <https://www.cgfm.mil.co/es/multimedia/noticias/fuerzas-militares-lanzan-operacion-perseo-para-recuperar-el-plateado-cauca>
- Comisión de la Verdad. (2022).** Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 11. Vol. 12 Valle y Norte del Cauca. <https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad>

Concejo Municipal de Argelia. (2020). Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023. <https://www.tangara.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/ARGELIA-PLAN-DE-DESARROLLO-MUNICIPAL-2020-2023.pdf>

Concejo Municipal de Argelia. (2024). Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027. https://tangara.gov.co/wp-content/uploads/planes_desarrollo_municipal_2024-2027/ARGELIA%20ACUERDO%20N%C2%B0%20009%20-%202024%20-%20PDM.pdf

Contraloría General de la República [CGR]. (2025). Noveno informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la Paz del Plan Plurianual de Inversiones. <https://vlex.com.co/vid/informe-congreso-contraloria-general-1089044957>

Cortés Landazury, R. H. (2024). Instituciones, etnicidad y conflicto: cohesión y fragmentación social en el departamento del Cauca (Colombia, 1990-2012). *Revista de Economía Institucional*, 26(50), 175-202. <https://doi.org/10.18601/01245996.v26n50.08>

Cuesta, I., Mazzoldi, G. y Durán, A. M. (2017). Mujeres y la economía cocalera en el Putumayo: roles, prácticas y riesgos. *Fundación Ideas para la Paz* (Informe No. 28). <https://storage.ideaspaz.org/documents/5a21a1163faf3.pdf>

De la Espriella, R., Galvis, J., Pinto, H., & Fandiño, A. (1990). Geomorfología de la cuenca del río Micay, departamento del Cauca. https://www.sogeocol.edu.co/documentos/rio_mikay.pdf

Defensoría del Pueblo. (2020a). Alerta Temprana

010-20. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/010-20.pdf>

Defensoría del Pueblo. (2020b). Alerta Temprana 047-20. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/047-20.pdf>

Defensoría del Pueblo. (2021). Argelia (Cauca) vive una crisis humanitaria recurrente que requiere atención prioritaria. <https://www.defensoria.gov.co/-/argelia-cauca-vive-una-crisis-humanitaria-recurrente-que-requiere-atenci%C3%B3n-prioritaria>

Defensoría del Pueblo. (2024). Alerta Temprana 013-24. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/013-24.pdf>

Defensoría del Pueblo. (2024). Cauca: voces que resisten. Informe sobre la situación de derechos humanos y DIH. https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3499940/Informe_Cauca-Voces-que-resisten-2024-2025.pdf

Defensoría del Pueblo. (2025a). Alerta Temprana 008-2025. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/008-25.pdf>

Defensoría del Pueblo. (2025b). Cauca: voces que resisten 2024-2025 (Informe defensorial). https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3499940/Informe_Cauca-Voces-que-resisten-2024-2025.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2018). Ficha municipal Censo Nacional de Población y Vivienda 2018: Argelia (Cauca). <https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/fichas/19050.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2020). Medida de Pobreza Multidimensional (IPM) de fuente censal 2018. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/medida-de-pobreza-multidimensional-de-fuente-censal>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2023). Proyecciones de población a nivel municipal periodo 2020 - 2035. Actualización Post COVID-19. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2024). Ficha Territorial: Argelia, Cauca. Sistema de Estadísticas Territoriales - TerriData. <https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/19050>

Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. (3 de marzo de 2025b). Iniciamos la Fase 2 en Argelia, Cauca para la sustitución voluntaria. Inscripciones del 3 al 25 de marzo [Infografía]. Facebook. <https://www.facebook.com/SoySustitucion/posts/iniciamos-la-fase-2-en-argelia-cauca-para-la-sustitucion-voluntaria-%EF%B8%8F-inscripcion/122230978550026380/>

Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito [DSCI]. (30 de julio de 2025b). Respuesta al derecho de petición del 30 de julio de 2025 (Radicado 20256000087361) [Documento no publicado].

El Espectador. (30 de octubre de 2024). Minería ilegal de oro de las disidencias contamina aguas del río Micay en Cauca. El Espectador. <https://www.elespectador.com/judicial/fuentes-hidricas-del-rio-micay-son-contaminadas-por-mineria-ilegal-de-las-disidencias-de-las-farc-noticias-de-hoy/>

El Espectador. (8 de octubre de 2025). Tras posponer mesa, habrá cese de operaciones ofensivas con disidencia de Mordisco. El Espectador. <https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/gobierno-petro-y-disidencia-de-farc-de-mordisco-ins-talan-mesa-de-dialogo-de-paz-cese-al-fuego/>

El Espectador. (13 de octubre de 2025). Operación Perseo: así está el Cañón del Micay a un año de la intervención militar. El Espectador. <https://www.elespectador.com/judicial/operacion-perseo-asi-esta-el-canon-del-micay-a-un-ano-de-la-intervencion-militar-en-cauca-noticias-hoy/>

El Herald. (19 de agosto de 2025). La ofensiva sorpresa del Ejército para “debilitar” las disidencias en Cauca: más de 300 soldados participan en la Operación Perseo II. El Herald. <https://www.elheraldo.co/colombia/2025/08/19/la-ofensiva-sor-presa-del-ejercito-para-debilitar-las-disidencias-en-cauca-mas-de-300-soldados-participan-en-la-operacion-perseo-ii/>

El País. (17 de noviembre de 2024). Los grupos armados duplican el precio de la pasta base de coca y entorpecen la idea del Gobierno

de comprar coca. El País. <https://elpais.com/america-colombia/2024-11-18/los-grupos-armados-duplican-el-precio-de-la-pasta-base-de-coca-y-entorpecen-la-idea-del-gobierno-de-comprar-la-hoja.html>

El Tiempo. (10 de enero de 2020). El presidente Iván Duque activó en el Cauca un Comando Específico. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/el-presidente-ivan-duque-activo-en-el-cauca-un-comando-especifico-450630>

Escuela Superior de Administración Pública [ESAP]. (2021). Esquema de ordenamiento territorial Argelia Cauca 2000: EOT Argelia Cauca 2000. <https://repositoriocdim.esap.edu.co/items/71e60065-fd08-4ef2-9aca-b5612f9f9579>

Fajardo, C. (12 de octubre de 2024). Operación Perseo: así fue el primer día de operaciones en El Plateado. Revista Cambio. <https://cambiocolombia.com/conflicto-armado-en-colombia/articulo/2024/10/operacion-perseo-fuerzas-militares-buscan-tomar-control-de-el-plateado/>

Fondo Colombia en Paz. (2024). El Gran Acuerdo Nacional liderado por el presidente Petro impulsa 41 proyectos financiados por el Fondo Colombia en Paz en el Cauca. <https://fcp.gov.co/el-gran-acuerdo-nacional-liderado-por-el-presidente-petro-impulsa-41-proyectos-financiados-por-el-fondo-colombia-en-paz-en-el-cauca/>

Fundación Ideas para la Paz [FIP]. (2022a). Ni paz ni guerra: escenarios híbridos de inse-

guridad y violencia en el gobierno de Iván Duque (Informe No. 36). https://storage.ideaspaz.org/documents/FIP_Infome_Ni-PazNiGuerra.pdf

Fundación Ideas para la Paz [FIP]. (2022b). Petro y el cambio en la estrategia de paz y seguridad: efectos y alertas. <https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2022-11/petro-y-el-cambio-en-la-estrategia-de-paz-y-seguridad-efectos-y-alertas>

Fundación Ideas para la Paz [FIP]. (diciembre de 2023). Mesa de diálogo con la disidencia de "Iván Mordisco": El desafío del Cañón del Micay sigue vivo [Infografía]. <https://multimedia.ideaspaz.org/infografias/infografia-el-plateado.html>

Fundación Ideas para la Paz [FIP]. (2024a). Segundo año de Petro: ¿dónde está el cambio? Balance territorial de la Paz Total. <https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2024-08/segundo-ano-de-petro-donde-esta-el-cambio-balance-territorial-de-la-paz-total>

Fundación Ideas para la Paz [FIP]. (agosto de 2024b). El desafío del Cañón del Micay sigue vivo [Infografía]. <https://multimedia.ideaspaz.org/media/website/infografia-micay.pdf>

Fundación Ideas para la Paz. (noviembre de 2024c). Un año de la nueva política de drogas del Gobierno Petro: ¿En qué van los cambios? <https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2024-11/un-ano-de-la-nueva-politica-de-drogas-del-gobierno-petro-en-que-van-los-cambios>

García Villegas, M., Torres Echeverry, N., Revelo Rebolledo, J. E., Espinosa Restrepo, J. R., & Duarte Mayorga, N. (2016). Los territorios de la paz: la construcción del Estado local en Colombia (Documento Dejusticia 28). Dejusticia. <https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/03/Los-territorios-de-la-paz-la-construcci%C3%B3n-del-Estado-local-en-Colombia.pdf>

Gobernación del Cauca. (2021a). Línea base de indicadores socioeconómicos. Diagnóstico de condiciones sociales y económicas. Municipio de Argelia. https://anterior.cauca.gov.co/sites/default/files/informes/final_argelia_0.pdf

Gobernación del Cauca. (4 de agosto de 2021b). Se firmó el Plan Cauca con legalidad, plan para todos. <https://www.cauca.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/Se-firm%C3%B3-el-Plan-Cauca-con-legalidad.-plan-para-todos.aspx>

González, L. (2025). Argelia, Territorio Campesino: El Reto de la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Indepaz. <https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2025/03/Articulo-Ar-gelia-propuesta-cultivos.pdf>

Infobae. (22 de enero de 2026). Fumigaciones con drones iniciarán en enero de 2026 en Argelia (Cauca), marcando el primer municipio intervenido en el departamento. <https://www.infobae.com/colombia/2026/01/22/fumigaciones-con-drones-iniciaran-en-enero-de-2026-en-argelia-cauca-marcando-el-primer-municipio-intervenido-en-el-departamento/>

Infobae. (27 de enero de 2026). Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 15 heridos en El Plateado, Cauca. Infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2026/01/27/violento-ataque-con-explosivos-lanzados-desde-drones-reportan-un-muerto-y-mas-de-15-heridos-en-el-plateado-cauca/>

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF]. (21 de agosto de 2025). La Casa Atrapasueños en El Plateado ya es una realidad: un espacio para proteger y cuidar los sueños de niñas, niños y adolescentes. <https://www.icbf.gov.co/la-casa-atrapasueños-en-el-plateado-ya-es-una-realidad-un-espacio-para-protector-y-cuidar-los-suenos>

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2025). Dinámicas de la propiedad rural en Colombia: Fragmentación y concentración predial en el departamento del Cauca. Dirección de Catastro. https://www.igac.gov.co/sites/default/files/2025-11/BFrag_11Cauca_DIGInd.pdf

Johnson, K. (15 de junio de 2025). Ataques en Cauca y Valle: ¿otra ronda de lo mismo? Razón Pública. <https://razonpublica.com/ataques-cauca-valle-otra-ronda-lo/>

Johnson, K. (20 de octubre de 2024). La intervención en El Plateado: ¿Consolidación a la Petro? Razón Pública. <https://razonpublica.com/la-intervencion-plateado-consolidacion-la-petro/>

Johnson, K. et al. (2024). Las disidencias de las FARC-EP: dos caminos en una guerra en construcción. Fundación Conflict Responses.

https://www.conflictresponses.org/wp-content/uploads/Informe-Las_disidencias_de_las_FARC-Parte2-2.pdf

Latorre, M. F. (12 de octubre de 2025). Un año de la Operación Perseo: FFMM consolidan control en El Plateado, Cauca. Caracol Radio. <https://caracol.com.co/2025/10/12/un-ano-de-la-operacion-perseo-ffmm-consolidan-control-en-el-plateado-cauca/>

Marín Llanes, Lucas. (2020). El asesinato de líderes sociales: efecto no intencionado de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Comentario de Política No. 1, Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED). Universidad de los Andes. <https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/f021e353-0bde-49af-93ba-47b663ee5506>

Ministerio de Justicia y del Derecho. (2023). Política Nacional de Drogas 2023-2033: "Sembrando vida, desterramos el narcotráfico". <https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Documents/Pol%C3%A-Dtica%20Nacional%20de%20Drogas%202023-2033%20%27Sembrando%20vida.%20desterramos%20el%20narcotr%C3%A1fico%27.pdf>

Ministerio de Justicia y del Derecho; Observatorio de Drogas de Colombia [ODC]. (s.f.). Sistema de Información de Drogas de Colombia - SIDCO. Recuperado el 7 de abril de 2026, de <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Paginas/SIDCO.aspx>

Morales, C. (6 de noviembre de 2023). Las divisiones dentro de disidencia de Mordisco que se develaron en reunión con el Gobierno. El Espectador. <https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/disidencia-de-farc-de-mordisco-reunion-con-gobierno-mostraria-una-division-en-el-grupo-cauca-paz-total/>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2020). Informe No. 23. Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS. Monitoreo a la implementación del Plan de Atención Inmediata. https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Febrero/INFORME_EJECUTIVO_PNIS_No_23.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2023). Monitoreo de Cultivos de Coca 2023. https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_informe_monitoreo_2023.pdf

Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios [OCHA]. (s.f.). Base violencia armada [Base de datos]. Recuperado el 13 de abril de 2026, de <https://monitor.unocha.org/colombia>

Oquendo, C. (12 de marzo de 2025). El Plateado, la prueba de fuego de Petro. El País. <https://elpais.com/america-colombia/2025-03-12/el-plateado-la-prueba-de-fuego-de-petro.html>

Osorio Garcés, C. E., Clavijo Gallego, T. A., & Sánchez Castillo, V. (2024). Desequilibrios territoriales en el Departamento del Cauca. *Pensamiento Americano*. <https://publicaciones.americana.edu.co/index.php/pensamientoamericano/article/view/724>

Parada, V. (8 de marzo de 2025). La Defensoría del Pueblo confirma la liberación de los 29 integrantes de la Fuerza Pública retenidos en El Plateado. *El País*. <https://elpais.com/america-colombia/2025-03-08/la-defensoria-del-pueblo-confirma-la-liberacion-de-los-29-integrantes-de-la-fuerza-publica-retenidos-en-el-plateado.html>

Paredes-Londoño, E. J. (2025). La sustitución de cultivos ilícitos en Argelia - Cauca desde 2017 a 2023. *Justicia*, 30(48), 1-29. <https://doi.org/10.17081/just.30.48.8381>

Patiño, J. (11 de octubre de 2025). Un año de la Operación Perseo: presencia militar, pero escasa acción del Estado. *Revista Cambio*. <https://cambiocolombia.com/conflicto-armado-en-colombia/articulo/2025/10/un-ano-de-la-operacion-perseo-presencia-militar-pero-escasa-accion-del-estado/>

Petro, G. [@petrogustavo]. (7 de noviembre de 2023). Es cierto que el pueblo del Plateado en el cañón del Micay, Cauca, quiere a la fuerza pública y sustituir las economías ilícitas... [Post]. X. <https://x.com/petrogustavo/status/1721758679362416905>

Presidencia de la República. (7 noviembre de 2023). Cese al fuego solo es posible si avanza la mesa de negociación: presidente Petro. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Cese-al-fuego-solo-es-posible-si-avanza-la-mesa-de-negociacion-presidente-Petro-231107.aspx>

[prensa/Paginas/Cese-al-fuego-solo-es-posible-si-avanza-la-mesa-de-negociacion-presidente-Petro-231107.aspx](https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Cese-al-fuego-solo-es-posible-si-avanza-la-mesa-de-negociacion-presidente-Petro-231107.aspx)

Presidencia de la República. (13 de octubre de 2024a). Gobierno Nacional llega a El Plateado con oferta institucional para transformar el territorio. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-nacional-presento-oferta-institucional-a-las-comunidades-de-El-Pla-241013.aspx>

Presidencia de la República. (18 de octubre de 2024b). En El Plateado empezaremos con la compra estatal de cosecha de coca: presidente Petro. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/En-El-Plateado-empezaremos-con-la-compra-estatal-de-cosecha-de-coca-presidente-Petro-241018.aspx>

Procuraduría General de la Nación. (7 de marzo de 2025). Procuraduría repudia secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública en Argelia, Cauca y exige su liberación inmediata. <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/repudia-secuestro-29-miembros-fuerza-publica-argelia-cauca-y-exige-liberacion-inmediata.aspx>

Programa Mundial de Alimentos. (s. f.-a). La crisis del comercio de la hoja de coca y la inseguridad alimentaria en Colombia (2022-2024).

Programa Mundial de Alimentos. (s. f.-b). Evaluación de seguridad alimentaria ante la crisis de comercialización de la hoja de coca.

Ríos, J. (16 de julio de 2024). Así se gestó la división en disidencia EMC que llevó a la ruptura con Iván Mordisco. *El Espectador*. <https://www.elspectador.com/colombia/asi-se-gesto-la-division-en-disidencia-emc-que-llevo-a-la-ruptura-con-ivan-mordisco/>

www.elspectador.com/colombia-20/conflicto/petro-rompe-cese-al-fuego-con-ivan-mordisco-asi-se-gesto-division-del-emc-en-dos-bandos/

Rodríguez, S. (17 de abril de 2024). La paz total sin “Mordisco”: así se dividió el EMC en la mesa de diálogos. La Silla Vacía. <https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/la-paz-total-sin-mordisco-asi-se-dividio-el-emc-en-la-mesa-de-dialogos/>

Saavedra, F. (15 de octubre de 2024). Por qué el cañón de Micay y El Plateado son tan importantes para las disidencias y otros grupos ilegales: Gobierno avanza en la operación Perseo para recuperar este territorio. Infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2024/10/15/el-canon-de-micay-y-el-plateado-son-el-epi-centro-del-conflicto-por-control-territorial-y-el-narcotrafico-en-cauca/>

Torrado, S. (22 de junio de 2025). El Ejército de Colombia denuncia que 57 militares fueron secuestrados por civiles bajo presión de las disidencias en el Cauca. El País. <https://elpais.com/america-colombia/2025-06-23/el-ejercito-de-colombia-denuncia-que-57-militares-fueron-secuestrados-por-civiles-bajo-presion-de-las-disidencias-en-el-cauca.html>

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria [UPRA]. (2021). Documento regional de apoyo a la planificación agropecuaria: Cauca. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. https://upra.gov.co/Kit_Territorial/2-%20Informaci%C3%B3n%20por%20Departamentos/CAUCA/2-%20Documento%20Regional%20UPRA%20Cauca.pdf

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2024). Índice de informalidad de la propiedad rural: Reporte estadístico por departamentos y municipios. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. https://upra.gov.co/sites/default/files/publicaciones/documentos/Indice_informalidad.pdf

Vidal, R. (29 de agosto de 2023). Desmantelan centro de minería ilegal que extraía 8 mil gramos de oro al mes en Cauca. W Radio. <https://www.wradio.com.co/2023/08/29/desmantelan-centro-de-mineria-ilegal-que-extraia-8-mil-gramos-de-oro-al-mes-en-cauca/>

Vidal, R. (29 de octubre de 2025). El ataque con drones en El Plateado Cauca dejó ocho heridos. W Radio. <https://www.wradio.com.co/2025/10/29/el-ataque-con-drones-en-el-plateado-cauca-dejo-ocho-heridos/>

W Radio. (22 de agosto de 2022). Se instaló el Puesto de Mando Unificado para la protección de la vida en el Cauca. <https://www.wradio.com.co/2022/08/22/se-instalo-el-puesto-de-mando-unificado-para-la-proteccion-de-la-vida-en-el-cauca/>



FUNDACIÓN **IDEAS PARA LA PAZ**

Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Calle 100 No. 8A – 55 Torre C. Of. 207
(+57) 316 472 9985
Bogotá, Colombia

www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org